

# **REFLEXIONES EN TORNO AL PROYECTO DE LEY SOBRE LIBRE DETERMINACION PARA PUERTO RICO RADICADO POR LAS CONGRESISTAS NYDIA VELAZQUEZ Y ALEXANDRIA OCASIO Y SU CORRELACION CON EL P. DE LA C. 5 RADICADO EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO**

**Alejandro Torres Rivera  
19 de abril de 2021**

**“Aquellos de entre los puertorriqueños que vean más fondo el porvenir, seguirán queriendo que Puerto Rico sea un Estado confederado de las Antillas Unidas en un todo político y nacional, y esos puertorriqueños saben ya que ni hoy ni mañana ni nunca, mientras quede un vislumbre de derecho en la vida norteamericana, está perdido para nosotros el derecho a reclamar la independencia, porque ni hoy ni mañana ni nunca dejará nuestra patria de ser nuestra”.**

**Eugenio María de Hostos (1900)**

## **I. Introducción:**

El tema de la revisión de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos ha sido recurrente tanto a nivel de la Rama Ejecutiva de los Estados Unidos como de su Rama Legislativa. Así lo atestigua, en el caso de la presidencia de dicho país, los dos Informes del Grupo de Trabajo Interagencial de Casa Blanca sobre el Estatus bajo la Administración de George Bush de 2005 y 2007; como el Informe de dicho Grupo de Trabajo sometido bajo la administración de Barack Obama de marzo de 2011.

Esto también se manifiesta en el Congreso y Senado de los Estados Unidos con por lo menos 17 iniciativas de legislación presentadas en los pasados 15 años relacionadas con el estatus de la Isla, a saber:

1. (S. 2304): *Puerto Rico Self-determination Act* de 16 de enero de 2006 (Kennedy y Lott)
2. (H.R. 4867): *Ley de la Democracia en Puerto Rico* de 21 de febrero de 2006 (Luis Fortuño)

3. (S. 2304) de 16 de febrero de 2006: Proyecto de ley que propuso vincular al Congreso con una Convención Constitucional de Estatus que estableciera los mecanismos de libre determinación. (Richard Burr)
4. (H. R. 4963): *Puerto Rico Self-determination Act* de 15 de marzo de 2006 (Nydia Velázquez, José Serrano y Luis Gutiérrez).
5. (H. R. 4963) de 15 de marzo de 2006: Proyecto de ley que propuso vincular al Congreso con una Convención Constitucional de Estatus que estableciera mecanismos de libre determinación (John Duncan)
6. (H. R.. 1230) de 28 de febrero de 2007: Proyecto de ley reconociendo el derecho de los puertorriqueños a convocar una Asamblea Constitucional de Estatus para ejercer la libre determinación a ser aprobada mediante Resolución por el Congreso (Nydia Velázquez)
7. (H. R. 2000) de 5 de mayo de 2013: Proyecto de ley proponiendo un referéndum federal donde los puertorriqueños indiquen si quieren la admisión de Puerto Rico como un estado de la Unión y si mayoría absoluta votaba a favor, el presidente tenía que presentar legislación para la admisión de Puerto Rico como estado. (Pedro Pierluisi)
8. (S. 2020) de 12 de febrero de 2014: Proyecto de ley convocando a un referéndum “Estadidad Si o No”. (Martin Heinrich, Rohn Whyden, y Brian Shatz)
9. (H. H. 727) de 4 de febrero de 2015: Proyecto de ley convocando a un referéndum “Estadidad Si o No”. Si se votaba a favor, el presidente debía iniciar un proceso de transición hacia la estadidad, efectivo a enero de 2021, y la creación de una comisión para aprobar las leyes necesarias al cambio. (Pedro Pierluisi)
10. (H. R. 260) de 4 de enero de 2017: Proyecto de ley proponiendo un lenguaje similar al de 2014 con un proceso de admisión de Puerto Rico como estado. (Jennifer González)

11. (H. R. 6246) de 27 de junio de 2018: Proyecto de ley proponiendo incorporar a Puerto Rico como territorio y creando Grupo de Trabajo del Congreso para rendir un informe, efectivo a enero de 2021, para la admisión de Puerto Rico como estado. (Jennifer González)
12. (H. R. 1965) de 28 de marzo de 2019: Proyecto para la admisión de Puerto Rico en un plazo de 90 días, sin consulta federal. (Darren Soto y Jennifer González)
13. (H. R. 4901) de 29 de octubre de 2019: Proyecto para incorporar a Puerto Rico como territorio si se votaba a favor de la estadidad en consulta de 3 de noviembre de 2020 con plan de transición de 30 meses. (José Serrano)
14. (H. R. 1522) de 2 de marzo de 2021: Proyecto de ley proponiendo un proceso de admisión resultante de referéndum estadidad Si o No. (Darren Soto y Jennifer González)
15. (S. 870) de 16 de marzo de 2021: Proyecto de ley proponiendo un proceso de admisión resultante de referéndum estadidad Si o No. (Martin Henrich)
16. (H. R. 2070) *Puerto Rico Self-determination Act of 2021*: Reconoce el derecho de los puertorriqueños a auto convocarnos en Asamblea de Estatus para ejercer el derecho a la libre determinación y creando comisión negociadora por la parte estadounidense. (Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez con más de 75 coauspiciadores)
17. (S. \_\_\_\_\_) *Puerto Rico Self-determination Act of 2021*. Reconoce el derecho a auto convocarnos en Asamblea de Estatus para ejercer el derecho a la libre determinación y creando comisión negociadora por la parte estadounidense. (Senador Robert Menéndez y otros 7 senadores como coauspiciadores)

Ciertamente, ninguna de estas medidas legislativas ha fructificado en la adopción por parte de los Estados Unidos de una política pública descolonizadora para Puerto Rico. De igual manera, los Informes

rendidos por el Grupo de Trabajo Interagencial tampoco han producido nada, más allá de posibles escenarios, sin resultado alguno.

Al presente se encuentran radicados en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos varias iniciativas relacionadas con el estatus de Puerto Rico. Las dos de mayor atención, son la promovida por la Comisionada Residente en Washington, Jennifer González, donde se plantea una petición de admisión de Puerto Rico como estado de la Unión; y la iniciativa en torno a un mecanismo procesal para el ejercicio de la libre determinación por parte del pueblo puertorriqueño. Este, en conjunto con la contraparte estadounidense, promovería el diálogo entre las diversas corrientes de pensamiento político en torno al estatus, así como la producción de fórmulas de relaciones políticas futuras con los Estados Unidos y de negociación, para viabilizar la solución de las actuales relaciones políticas entre ambos pueblos fuera de la condición territorial que impone el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos hacia sus territorios y propiedades.

En el presente escrito abordaremos la discusión, antecedentes y evolución de la propuesta que hoy se presenta en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos bajo el título *Puerto Rico Self-determination Act of 2021*.

## **II. Puerto Rico Self-determination Act of 2006:**

El 15 de marzo de 2006, por iniciativas de la congresista Nydia Velázquez junto a los congresistas Luis Gutiérrez y José Serrano, bajo el número H. R. 4963, fue radicado un proyecto de ley titulado *Puerto Rico Self-determination Act of 2006*. A su vez el 16 de febrero de 2006, otra medida con igual propósito e igual nombre fue radicada en el Senado de los Estados Unidos por los Senadores Edward Kennedy, Trent Lott y Robert Menéndez bajo el número S. 2304. Ambas iniciativas contaron con el endoso de varios congresistas y senadores republicanos.

En las medidas, el Congreso y Senado de los Estados Unidos reafirmaban la “autoridad inherente” del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de “convocar” y así se autorizaba expresamente, “una convención constitucional por medio de delegados

electos con el propósito de establecer un mecanismo a través de la cual el pueblo de Puerto Rico pueda ejercitar su derecho a la libre determinación y establecer un mecanismo para la libre determinación.”

Los proyectos contemplaban como opciones “un nuevo o enmendado pacto de asociación” que sustituyera el presente bajo la Ley 600-1950; la admisión de Puerto Rico como un estado de los Estados Unidos y la declaración de la independencia.

El proyecto contemplaba, además, que una vez aprobada por la Convención Constitucional una “opción de libre determinación” ésta se sometería al Congreso para su aprobación. Aprobada la propuesta de libre determinación, con o sin modificaciones por el Congreso, esta se sometería mediante referéndum al pueblo del Puerto Rico para su aprobación o rechazo. De ser refrendada mediante referéndum el método de asamblea, el Congreso aprobaría a su vez una resolución conjunta aprobando los términos de la propuesta y su implantación. Si la opción de libre determinación no fuera aprobada por el pueblo de Puerto Rico o por el Congreso, se convocaría una nueva Convención Constitucional y se elegirían nuevos delegados para someter ante el Congreso una nueva propuesta. La Convención Constitucional seguiría sesionando hasta que una propuesta de libre determinación fuera aprobada en referéndum por el pueblo de Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos.

Las medidas no fueron aprobadas ni por el Congreso ni por el Senado de los Estados Unidos.

### **III. Puerto Rico Self-determination Act de 2020:**

El 28 de julio de 2020 fue radicado por iniciativa de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez un nuevo proyecto de ley titulado *Puerto Rico Self-determination Act of 2020*.

Al igual que los proyectos de 2006, la medida parte de dos premisas esenciales:

(a) reconocer el derecho del pueblo de Puerto Rico a convocar una Asamblea de Estatus como parte del ejercicio del derecho natural a la libre determinación; y

(b) reconocer el derecho a establecer un mecanismo para que el Congreso reconozca tal determinación.

En sus hallazgos (“findings”) el proyecto radicado menciona los siguientes:

- (a) En 1898 los Estados Unidos adquirieron por conquista, en virtud del Tratado de París, a Puerto Rico, Guam y Filipinas.
- (b) En 1900, bajo la Ley Foraker, se estableció un gobierno civil. La Ley estableció un Consejo Ejecutivo, consistente en varios departamentos y un Comisionado Residente que representa la Isla en el Congreso.
- (c) En 1901 la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dispuso que Puerto Rico pertenece, pero no forma parte de los Estados Unidos. El Juez White, en Opinión Concurrente, sostuvo que el Congreso tiene la discreción de decidir si incorpora o no a Puerto Rico como un territorio.
- (d) El Congreso reconoció mediante la Ley 600-1950 la autoridad de Puerto Rico para gobernar sobre sus asuntos internos. En tal virtud, proveyó para organizar un gobierno constitucional que el Congreso adoptó como un convenio (“compact”) y luego ratificó la Constitución en julio de 1952.
- (e) El 18 de noviembre de 1953 las Naciones Unidas reconocieron, bajo la Resolución 748 de la Asamblea General a Puerto Rico como una entidad política con gobierno propio.
- (f) Estados Unidos tiene el deber legal de cumplir con el Artículo 1 del *Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos* que establece el derecho de todo pueblo a su libre determinación y en “virtud de tal derecho, a determinar libremente su estatus político, y procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural.”
- (g) La Convención de Estatus provee el espacio deliberativo comprensivo e ininterrumpido de diálogo para definir el futuro de Puerto Rico.

Sobre la Convención de Estatus que define la medida se señala lo siguiente:

- (a) La asamblea legislativa de Puerto Rico tiene la autoridad inherente para convocar una convención de estatus constituida por delegados a ser determinados por legislación aprobada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el propósito de proponer al Pueblo de Puerto Rico una opción de libre determinación. Las deliberaciones del cuerpo serían semipermanentes, sujeta dicha Convención a disolución sólo cuando los Estados Unidos ratifique una opción de libre determinación presentada por la Convención al Congreso. Indica, además, que los delegados serán electos por los votos de los puertorriqueños en una elección acorde con la legislación aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.
- (b) Señala que el Tesoro de Estados Unidos separará un fondo, conocido como “Puerto Rico Status Convention Public Matching Fund”, que será administrado por la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, sujeto a la Junta Federal de Elecciones, donde se le distribuirá \$4.00 a cada candidato a delegado por cada \$1.00, si la contribución a la campaña que el candidato reciba es menor de \$100.00; y es donado por un residente de Puerto Rico. Se establece en la Ley los requisitos para el pareo de fondos. Se establece para ello separar en dicho fondo la suma de \$5.5 millones.
- (c) Finalmente indica que los delegados electos, en consulta con la llamada “Comisión Bilateral Negociadora del Congreso”:
  - (1) debatirán y redactarán definiciones de opciones de libre determinación para Puerto Rico fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos;
  - (2) establecerán los correspondientes planes de transición para las opciones de libre determinación; y

(3) escogerán una opción con su correspondiente plan de transición, para presentarlas al Pueblo de Puerto Rico en referéndum.

El proyecto de ley establece, al crear la “Comisión Negociadora Congresional Bilateral”, que ésta será responsable de:

- (a) Proveer consejo y consultas a los delegados de la Convención de Estatus.
- (b) Los integrantes de la Comisión incluirán:
  - (1) los presidentes del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y del Comité de Energía del Senado;
  - (2) los integrantes de mayor rango de los Comités de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y del Comité de Energía y Recursos Naturales;
  - (3) un miembro seleccionado por el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes;
  - (4) un miembro seleccionado por el líder de la minoría de la Cámara de representantes;
  - (5) un miembro seleccionado por el líder de la mayoría del Senado;
  - (6) un miembro seleccionado por el líder de la minoría del Senado;
  - (7) el(la) Comisionado(a) Residente de Puerto Rico; y
  - (8) con el consentimiento del Portavoz de la mayoría de la Cámara de Representante y de la mayoría del Senado, un miembro del Departamento de Justicia;

Los deberes y las funciones de la Comisión son definidos en el proyecto de ley como los siguientes:

- (a) Realizar reuniones periódicas con los delegados en Puerto Rico y en el Distrito de Columbia a petición de los delegados.
- (b) Autoridad para estudiar, realizar hallazgos y formular recomendaciones sobre diferentes opciones de libre determinación en *issues* constitucionales y políticas relacionadas con la cultura, idioma, sistemas de educación, justicia e impuestos, ciudadanía estadounidense, y ayuda y asistencia técnica, así como consejo constitucional a los delegados por el tiempo de duración de la Convención de Estatus.
- (c) Llevar a cabo, a solicitud de los delegados, vistas públicas relacionadas con aspectos de la Convención.
- (d) Recibir testimonios.
- (e) La Comisión deberá proveer con no menos de tres meses periódicamente al Portavoz de la Cámara de Representantes y al Senado informes sobre el estatus, hallazgos y estudios, y al menos cada 12 meses a la Cámara de Representantes y al Senado informes sobre el estatus, los que hará disponibles en idioma inglés y español en el mismo día en que los informes se sometan al público en general.

Con relación al “Referéndum sobre Estatus” en Puerto Rico que contempla el proyecto, se indica:

- (a) El voto en un referéndum por parte de los residentes de Puerto Rico será llevado a cabo de manera que se pueda expresar las preferencias de los electores en un formato sin límites en cuanto al número de opciones; y donde las definiciones y plan de transición de libre determinación sean las que presentaron los delegados electos y donde se pueda incluir más de una opción, con la misma definición pero con un plan de transición distinto, como se presentó ante los delegados en la Convención de Estatus.

- (b) Se autoriza la suma de \$2.5 millones para llevar a cabo el mismo.
- (c) Si el referéndum es aprobado por el Pueblo de Puerto Rico, el Congreso aprobará una Resolución Conjunta para ratificar la “opción de libre determinación” que se apruebe al amparo de esta Ley. Si el Congreso culminara sus trabajos antes de que se actúe sobre la “opción de libre determinación”, la Convención de Estatus de Puerto Rico creada bajo esta Ley se reunirá nuevamente y reenviará la “opción de libre determinación” al nuevo Congreso.

Me parece que al examinar la propuesta de Velázquez y Ocasio sometida el 28 de julio de 2020, existen aspectos positivos superiores a los que recogía el proyecto de 2006 al que hicimos referencia y que en el marco de ese análisis vale la pena señalar. Al hacerlo debemos tomar en consideración que se trata de una medida radicada en el Congreso y Senado de los Estados Unidos, donde todo trámite legislativo tiene sus complicaciones procesales y en el caso de un proyecto de esta naturaleza, también sus obstáculos sustantivos. Veamos tales elementos positivos o negativos:

- (a) Creo que es importante el reconocimiento que hace la medida legislativa del derecho de los puertorriqueños a convocar una Asamblea de Estatus y a establecer nosotros el mecanismo procesal que lleve al Congreso a reconocerlo. Si bien en la nueva propuesta se quita en el nombre de asamblea lo de "constitucional", eso no es un detalle determinante. Se puede señalar que es mucho más importante que sea el método de "asamblea" o "convención", aquel sobre el cual los puertorriqueños se expresen al inicio del proceso con el voto, que lo que pueden ser los "plebiscitos" no vinculantes, retomando así un concepto que, además, está presente en la histórica constitucional de Estados Unidos en el desarrollo de sus Congresos Continentales. La propuesta procesal de convención es, además, el método idóneo para, en conjunto, los distintos sectores ideológicos en nuestro país en materia de estatus, deliberar, acordar entre nosotros las opciones de libre determinación teniendo a nuestro alcance el mecanismo de negociar a nombre del Pueblo de Puerto

Rico mediante delegados electos, con el Congreso de Estados Unidos.

- (b) En el proyecto de 2020, el uso de los términos "opciones de libre determinación" y "planes de transición para las opciones de libre determinación" (en plural), que se plantea para el proceso de debate y redacción de los delegados, aparentaba chocar en su redacción con la indicación de que se someterá al Congreso la "opción de libre determinación" (en singular).

Con relación a esta redacción de la propuesta de 2020 se podía interpretar, pero no está así de claro, que la primera instancia se refería al proceso inicial de parte de los delegados entre sí de definir las opciones; y el segundo, una vez en el proceso de negociación se fueran decantando las opciones frente a Estados Unidos, la que quedara sería la que se sometería por la Convención de Estatus a la consideración del Congreso.

Procurando encontrar una racionalidad política en la propuesta en el uso de los términos “opciones” y “la opción”, podría interpretarse que se consideraron las opciones bajo el siguiente prisma: En el caso de la independencia, se consideró que no contaría con el apoyo mayoritario de los puertorriqueños, mientras que en caso de la estadidad, se consideró que no contaría con el apoyo de las estructuras de gobierno de los Estados Unidos. Es decir, es decir, descartando los dos extremos, “Independencia” y “Estadidad”, la intención en el proyecto podría ser mover o timonear el proceso en Puerto Rico hacia un escenario de Libre Asociación como “opción de libre determinación”.

Esta premisa, sin embargo, tiene su dosis especulativa, por lo que necesariamente era y en efecto fue el objeto de reevaluación en el proyecto presentado en el 2021.

(c) La medida insistía y todavía insiste en señalar que en 1952 hubo un "convenio" en virtud del cual el Congreso ratificó la Constitución, cuando la propia Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el caso de *Pueblo v. Sánchez Valle*, hace referencia a la posición de la Procuradora de Justicia de los Estados Unidos señalando que lo que significa el mencionado "convenio" no es el que se nos ha dicho. De acuerdo con sus expresiones, el llamado "convenio" se reduce a que nosotros los puertorriqueños aceptamos mediante referéndum el ofrecimiento del Congreso bajo la Ley 600-1950 legisló autorizando un referéndum para la convocatoria a una "convención constitucional" y elegir delegados responsables de elaborar una Constitución para organizar un gobierno propio en asuntos estrictamente locales, en forma republicana, con separación de poderes y una Carta de Derechos y nosotros, en efecto, autorizamos la misma, sujeta a revisión y aprobación por el presidente de los Estados Unidos y el Congreso.

Veo, sin embargo, como elemento positivo, que el proyecto de 2020 omite en cuanto a "opciones de libre determinación" la referencia a un "nuevo ELA" o a un Estado Libre Asociado "nuevo o modificado".

(d) Es positivo el reconocimiento del "deber" que tiene los Estados Unidos de cumplir con el *Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos*. Este dato no se recoge en las Resoluciones del "Comité de Descolonización de las Naciones Unidas" sobre Puerto Rico. El Pacto impone a los países signatarios el reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos, a establecer libremente su condición política y promover su desarrollo económico, social y cultural; al cumplimiento con la Carta de las Naciones Unidas, y con las constituciones de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que se refieren en dicho Pacto.

(e) Es positivo que se señale el carácter "comprehensivo e ininterrumpido de diálogo" a desarrollarse entre la Convención de Estatus y el Congreso "para definir el futuro político". Es importante, además que se indique que si el Congreso concluye su término sin acordar la "opción de libre determinación", la Convención de Estatus se reuniría nuevamente y reenviaría la opción de libre determinación al nuevo Congreso. Esto salvaría que la iniciativa muera cuando finalicen los dos años que dura cada Congreso bajo el ordenamiento constitucional de los Estados Unidos.

(f) Es positivo que se señale en la medida que los delegados elaborarán, no solo las opciones de libre determinación, sino también los planes de transición en cada una.

(h) Es positivo en el caso de Estados Unidos, que la "Comisión Negociadora Congresional Bilateral" involucre a los presidentes en Cámara y Senado de los Comités de Energía y Recursos Naturales y Energía respectivamente; a los demás funcionarios mencionados de la Rama Legislativa; y que la representación del representante Departamento de Justicia en esta Comisión, se decida con "el consentimiento" del Portavoz de la Cámara y del líder de mayoría del Senado.

(i) Es positivo que el Proyecto determine los deberes y funciones de la "Comisión Negociadora Congresional Bilateral".

(j) Me parece que también es positivo que el Proyecto disponga que la "opción de libre determinación" que será sometida a los puertorriqueños, será aquella que haya sido escogida por los delegados a la Convención de Estatus. Esto evita que el Tribunal Federal o el Tribunal Supremo de Puerto Rico intervenga con el contenido de la consulta.

#### **IV. *La activación del Grupo Interagencial de Casa Blanca***

De acuerdo con el periodista José Delgado, en publicación hecha por el periódico *El Nuevo Día* 19 de enero de 2021, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decidió activar una vez más, a nivel de Casa Blanca, el Grupo Interagencial sobre Estatus. En el ejercicio de sus facultades, Biden designó como encargada de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales a la puertorriqueña Gretchen Sierra Zorita. Esta funcionaria proviene de la entidad denominada “Equality America”, la cual ha promovido la igualdad de derechos para los residentes en los territorios estadounidenses que disfrutan los ciudadanos de los estados de la Unión. Sierra Zorita, participante activa del Partido Demócrata y de la campaña presidencial de Joe Biden, ha estado también vinculada a la agrupación “Agenda Nacional Puertorriqueña” y al “Centro de Estudios Hispanos” de Hunter College. Durante la administración del presidente Clinton, trabajó en una posición de confianza dentro de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, USAID por sus siglas en inglés.

La designación de Sierra Zorita ha contado con el endoso del Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En su convocatoria a vistas públicas sobre el proyecto de la Comisionada Residente y el de las Congresistas Velázquez y Cortez, Grijalva ha solicitado y se encuentra en espera, de la posición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en torno a estas medidas.

#### **V. *Puerto Rico Self-determination Act of 2021:***

Al igual que ocurrió con las medidas radicadas en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos durante el pasado año bajo este mismo título, en esta ocasión una versión enmendada fue radicada en ambas cámaras legislativas.

En la nueva propuesta, bajo los números H. R. 2070 y S.\_\_\_\_\_, se reflejan varios cambios de importancia:

- (a) Al referirse a las opciones (en plural), mantiene el principio de que sean “opciones” de libre determinación en plural y no en singular,

las que se le presentarán al pueblo para que vote sobre ellas en referéndum, requiriendo sean fuera de la Cláusula Territorial.

- (b) El proyecto propone que además de un representante del Departamento de Justicia, designado con el consentimiento de la mayoría de Cámara y del Senado para participar en la “Comisión Negociadora Congresional Bilateral”, también se incorpore en la misma bajo similares términos a un representante del Departamento del Interior de los Estados Unidos. Esto le daría una mayor participación a la Rama Ejecutiva en dicho organismo.<sup>1</sup>
- (c) Se toma en consideración, en la participación de los integrantes de la Comisión Negociadora Bilateral Congresional que serían designados por los líderes de la mayoría y minoría en dichos cuerpos a los puertorriqueños en la diáspora al indicar que deben provenir, conforme al Censo, de uno de los 10 estados o distritos con población identificada como puertorriqueña.
- (d) Sustituye la expresión genérica de que la Comisión Negociadora Bilateral deberá informar a la Cámara y al Senado a través de sus portavoces periódicamente sus hallazgos y estudios, por un mandato de que dichos informes deberán ser al menos trimestrales y al pleno de la Cámara y el Senado anualmente informes sobre el estatus.
- (e) Dispone que en el proceso de someter en referéndum a los residentes de Puerto Rico las opciones de estatus, deberán ser “en un formato sin límites en el número de opciones con su plan de transición; y también contempla el escenario de que una misma opción con la misma definición, cuente con distintos planes de transición.
- (f) Indica que los delegados llevarán a cabo una campaña educativa a través de medios tradicionales; autoriza a la Comisión Estatal

---

<sup>1</sup> Se ha planteado por personas como el integrante de ALAS, organización que promueve un Pacto de Libre Asociación Soberana entre Puerto Rico y los Estados Unidos, una propuesta que a nuestro juicio sería positivo, que es que en dicha Comisión Negociadora Congresional Bilateral, también se incorpore alguien que represente la posición del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La pertinencia de la propuesta reside en el hecho de que, en el caso de las opciones de independencia y libre asociación, la relación política futura se regiría por el mecanismo de Tratados entre la nueva entidad política que surja y los Estados Unidos.

de Elecciones y le asigna \$5 millones para que los haga disponibles en partes iguales a las opciones de libre determinación que concurran al referéndum.

- (g) Se regula el rendimiento de informes trimestrales a la Comisión Federal de Elecciones por parte de los delegados sobre las campañas educativas que lleven a cabo.
- (h) Indica que si el referéndum bajo esta ley es aprobado por el pueblo de Puerto Rico, el Congreso deberá aprobar una resolución para ratificar la opción de libre determinación aprobada en el referéndum. Si cuando termine el Congreso este ha dejado de actuar sobre el resultado de la votación, la Convención Constitucional de Estatus se reunirá nuevamente para remitir al siguiente Congreso las opciones de libre determinación.<sup>2</sup>
- (i) Indica que la resolución conjunta debe ser introducida dentro de los 10 días de haberse ratificado por la Comisión Estatal de Elecciones el resultado del referéndum. Esta se referirá al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y al Comité de Energía del Senado de los Estados Unidos. Si el Comité al cual se refiere la certificación no informa de la resolución o de otra similar dentro del término allí dispuesto para ello, la resolución será puesta en el calendario del cuerpo correspondiente para su consideración.
- (j) La medida contempla mecanismos específicos para la discusión de la resolución conjunta cuando se limite o torpedee el proceso para pasar juicio y decidir sobre la opción de libre determinación escogida por los puertorriqueños.

## **VI. Conclusión:**

No existen proyectos de ley perfectos, mucho menos si son el producto de la búsqueda de consensos entre diferentes puntos de vista en torno a cómo atender situaciones especiales; en nuestro caso

---

<sup>2</sup> Aquí el lenguaje resulta confuso dado el hecho de que en el párrafo hace referencia a que se enviará al Congreso la “opción” (en singular) que resulte aprobada en el referéndum y luego, cuando hace referencia a qué se enviará al siguiente Congreso si el que venció dejó de actuar, menciona la palabra “opciones” (en plural).

particular, en un tema que tanto divide al pueblo puertorriqueño, pero que a su vez reconocemos, es imperativo atender y resolver.

El proyecto de ley que promueven las congresistas Velázquez y Ocasio tiene también la anterior característica. Sin embargo, un examen de las medidas radicadas entre 2006 y el presente para atender procesalmente el tema del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo puertorriqueño; y de que los Estados Unidos asuman su responsabilidad al amparo del derecho internacional y doméstico con viabilizar tal ejercicio de libre determinación; de todos los mencionados el que ha llegado más lejos en el Congreso y Senado de los Estados Unidos, es la propuesta contenida en el *Puerto Rico Self-determination Act of 2021*.

Como propuesta legislativa, la medida tiene aún la posibilidad de ser mejorada en el proceso de vistas públicas; también tiene el mérito de generar un rico debate, sobre todo confrontando sus elementos positivos frente a otras iniciativa engañosas o pervertidas, dirigidas a que nos cancelemos unos con otros detrás del discurso del estatus para que las cosas sigan iguales, en una relación de subordinación política, sin cambios, sin opciones, sin salidas.

Reconociendo lo complicado que puede resultar la discusión e incluso el entendimiento de la propuesta que nos presentan la congresistas Velázquez y Ocasio, considero que los 10 elementos más positivos que nos presenta el Proyecto de ley *Puerto Rico Self-determination Act of 2021*, son los siguientes:

1. Reconoce el derecho de los puertorriqueños a convocar una Asamblea de Estatus y establecer un mecanismo que lleve al Congreso a reconocerlo.
2. Destaca el método de asamblea como el mecanismo idóneo para, en conjunto, deliberar y negociar a nombre del Pueblo de Puerto Rico con el Congreso de Estados Unidos y representantes de su Rama Ejecutiva.
3. Plantea que los delegados electos por los puertorriqueños definirán las “opciones de libre determinación”, las que deberán estar fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados

Unidos y elaborarán para cada una de ellas los planes de transición.

4. Reconoce que los Estados Unidos tienen el “deber” de cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue ratificado por dicho país en 1992 y forma parte de lo que en el constitucionalismo estadounidense se llama “the law of the land”.
5. La importancia en que consigna el carácter “compresivo e ininterrumpido de diálogo” entre la Convención de Estatus electa por los puertorriqueños y la “Comisión Negociadora Congresional Bilateral” designada en los Estados Unidos; y que si el Congreso concluyera su término sin acordar “la opción de libre determinación”, la Convención de Estatus se reunirá nuevamente y reenviará las opciones de libre determinación al nuevo Congreso.
6. Lo conformación de los integrantes de la Comisión Negociadora Bilateral Congresional de parte de Estados Unidos, incluyendo dirigentes de mayoría y minoría del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara y Senado; la inclusión de una representación del Departamento de Justicia y del Departamento del Interior de los Estados Unidos; que en la designación de los representantes de minoría y mayoría en ambas Cámaras se tome en consideración que provengan de estados o distritos con alta población puertorriqueña.
7. Define los deberes y funciones de la Comisión Negociadora Congresional Bilateral.
8. Indica que las “opciones de libre determinación” que serán sometidas a los puertorriqueños serán aquellas escogidas por los Delegados en la Convención mediante referéndum.
9. Incorpora en rendimiento de informes trimestrales sobre el desarrollo de los trabajos de la Comisión Negociadora Bilateral a los directivos de los cuerpos y a los cuerpos, el rendimiento anual de un informe sobre el estatus.

10. La continuidad de las labores de la Convención de Estatus si el Congreso no actuara durante su vigencia; como también, mecanismos para impedir que no se tome acción por parte de los cuerpos legislativos de los Estados Unidos una vez el pueblo de Puerto Rico se exprese en referéndum sobre las opciones de libre determinación.

Me parece que un elemento de importancia adicional que debemos tener presente, es que esta iniciativa congresional concurre en tiempo con la radicación en Puerto Rico por parte de la mayoría legislativa en la Cámara de Representantes del P. de la C. número 5. Esta medida, de ser aprobada y promulgada como ley, convocaría a un referéndum donde los electores en Puerto Rico se expresarían a favor o en contra de la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus (ACE) para atender el tema de las relaciones políticas futuras de Puerto Rico con los Estados Unidos fuera de la cláusula territorial del Artículo IV, Sección 3 de la Constitución Federal. De así ser aprobada en referéndum la convocatoria a la ACE, se procedería a una segunda elección para la selección de delegados a dicha Convención con la encomienda de deliberar y acordar las definiciones de futuras relaciones políticas con los Estados Unidos sobre bases no coloniales y no territoriales. Los delegados escogerían, a su vez, del seno de la Convención la representación que mediante una Comisión Negociadora se reuniría para discutir y acordar con los Estados Unidos aquellas fórmulas de relación política que la contraparte estadounidense esté dispuesta a acordar, así como sus términos y condiciones, incluyendo la transición hacia cada una de ellas.

Que se desarrolle este debate y discusión de manera simultánea y conjunta en Puerto Rico y Estados Unidos añade un elemento de riqueza al proceso en la medida en que se socializa y generalizaría un debate sobre opciones y alternativas reales por cada parte, las que se irán decantando en opciones reales de futura relación política y ejercicio de libre determinación. Por esto, la iniciativa de las congresistas Velázquez y Ocasio, como el P. de la C. 5 debemos entenderlas como parte del “proceso” de la discusión y no como un “fin” en sí mismo. En esta etapa, esa y no otra es la mayor ganancia. En este sentido, lejos de colocar piedras en el camino al proyecto de las congresistas Velázquez y Ocasio, debemos allanar la ruta para su discusión y

aprobación en las respectivas cámaras legislativas en Estados Unidos y entre el pueblo.

Más allá de lo antes indicado, en lo que sí insistimos y debemos darle la mayor prioridad, es al desarrollo de la discusión en Puerto Rico de la vía procesal de convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus.

Defendemos la propuesta que, desde la sociedad civil, promueve el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Esa propuesta es, la que por petición, es hoy el P. de la C. Número 5. Reconocemos que este proyecto puede ser mejorado con nuevas ideas, por ejemplo, cómo ha de darse la participación de la diáspora puertorriqueña en el proceso de elección de delegados y en su representación con delegados en la Asamblea; cuál ha de ser finalmente su número y el número de delegados de la Asamblea; como interactuará la Asamblea de delegados en Puerto Rico con un organismo como el propuesto en el *Puerto Rico Self-determination Act de 2021* de Comisión Negociadora Bilateral, etc.

Reconocemos también el hecho de que existen otras modalidades de Asamblea Constitucional de Estatus que han sido propuestas, donde se encuentran elementos coincidentes con la que impulsa el Colegio y la que desde los partidos políticos se asume, principalmente en torno a la responsabilidad en la definición de las fórmulas y en la propuesta de estructura de negociación con la contra parte estadounidense. Sin embargo, lo importante en esta etapa, es impulsar el método, afinando en el trámite legislativo, sus características y sus competencias.

Un elemento que contribuiría al proceso de discusión en el país es la radicación de resoluciones a nivel de las legislaturas municipales para que a través de ellas se lleven a cabo procesos de vistas públicas, tanto sobre el P. de la C. Número 5 como de los proyectos radicados por las congresistas Velázquez y Ocasio.

El Apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, nos decía que no había nada peor en los momentos decisivos que la indecisión. Creo que expresar en este momento nuestro apoyo a los proyectos radicados en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos cuya iniciativa la generan las congresistas Velázquez y Cortez, es

actuar con decisión en momentos que son decisivos. Esta debe ser la actitud de todos y todas.



20 de abril de 2021

## MENSAJE DE LA ORGANIZACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE LA MUJER TRABAJADORA A LA VISTA VIRTUAL DE PUEBLO POR LA AUTODETERMINACIÓN

Como organización feminista, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) entiende que las condiciones presentes han hecho claro y evidente el carácter colonial de la relación de Estados Unidos con la nación puertorriqueña, así como que el pueblo de nuestro país no se encuentra decidido en torno a la respuesta para romper con esta situación de subordinación nacional. Es preciso dar curso sin demora a un proceso inclusivo y democrático que posibilite la autodeterminación de nuestro pueblo. Es por ello que apoyamos el H.R. 2070 -Puerto Rico Self Determination Act- que propiciaría una convención de estatus a través de la cual el pueblo ejercería su derecho natural a la autodeterminación y establecería un mecanismo para la consideración por parte del Congreso de dicha decisión. Rechazamos el H.R. 1522 -Puerto Rico Statehood Admission Act- por considerar que este proyecto, como los referéndums en que se fundamenta, han sido excluyente de otras opciones de estatus para Puerto Rico y sesgada hacia la alternativa de la estadidad.

Como mujeres puertorriqueñas nos hemos visto sometidas en nuestro país a las múltiples formas de opresión de género, acentuadas por otras desigualdades como las de clase y raza, además, en nuestro caso, por la subordinación colonial. Para considerar sólo los períodos más recientes, hemos sido las puertorriqueñas quienes hemos sufrido de manera desproporcionada las limitaciones a los recursos y al empleo impuestas por estrategias económicas que han dependido fundamentalmente de los beneficios e intereses del capital y el Estado norteamericano. Por tanto, hemos sido también las más propensas a la pobreza y a la consecuente dependencia de los recursos y servicios ofrecidos por el Estado – sujetos a las luchas políticas por el gobierno estadounidense y regateados aún en momentos de desastres naturales y la presente pandemia del Covid19. Incluso el acceso a nuestra salud y derechos sexuales y derechos reproductivos se ve sometido a los vaivenes y luchas culturales y políticas en Estados Unidos y las decisiones que rigen nuestra legislación y jurisprudencia e inciden en nuestras propias discusiones y políticas públicas. El peso cada vez mayor del cuidado y la calidad de vida de las familias recae sobre los hombros de las mujeres, con opciones más restringidas, poniendo en vilo su propio bienestar y la propia reproducción de nuestra gente. La vulnerabilidad a la violencia en general, y a la violencia de género en particular se acrecienta ante estas condiciones de inseguridad y miseria acentuadas por la subordinación colonial. Ni que decir que son las mujeres de menos recursos, las de raza negra, las de género no binario las más propensas a esta pobreza, represión y violencia. La situación colonial nos persigue aún en la diáspora en Estados Unidos donde, como conjunto, parte importante de nuestra población se mantiene en los escalafones inferiores sociales, económicos, de salud y bienestar, junto a otros grupos migrantes latinoamericanos racializados como no blancos.

El Proyecto H.R. 2070 ofrece la oportunidad de una discusión amplia para encaminar un proceso de autodeterminación que ponga fin a la subordinación colonial de la nación puertorriqueña. La elección de personas delegadas que representen las distintas alternativas en una Asamblea Constitucional de Status debe posibilitar la elaboración de sus definiciones claras, incluyendo las condiciones precisas implicadas en cada opción y su proceso de transición, que permita al pueblo tomar una decisión informada. Nos parece importante que, en esa discusión, y desde la ley fundacional del mecanismo escogido, se incorpore una perspectiva de género y de las diversas condiciones de desigualdad en nuestra sociedad, así como la participación equitativa de las mujeres. Esto quizás es más complejo y difícil, no obstante, a la misma vez abre espacios más democráticos y participativos. Este trabajo del pueblo puertorriqueño, junto a la consideración por parte del Congreso de Estados Unidos, por su parte, debe ofrecer garantías de que el gobierno de ese país se compromete de manera vinculante con este proceso de decisión y autodeterminación de Puerto Rico.

#### MESSAGE OF THE ORGANIZACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE LA MUJER TRABAJADORA (PUERTO RICAN ORGANIZATION OF WORKING WOMEN) TO THE VIRTUAL PEOPLE'S HEARING FOR SELF-DETERMINATION

As a feminist organization, the Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) considers that the present conditions have clearly evidenced the colonial nature of the relation of United States with the Puerto Rican nation, as well as that our people have not yet decided with regard to the alternative to this situation of national subordination. It is imperative that we proceed without further delay with an inclusive, democratic process that makes possible our self-determination. We therefore support H.R. 2070 –Puerto Rico Self Determination Act- which would provide for a Status Convention through which Puerto Ricans would exercise their natural right to self-determination and for establishing a mechanism for Congressional consideration of such a decision. We reject H.R. 1522 - Puerto Rico Statehood Admission Act- as this Project, and the referendums which it claims as its basis, have excluded other status options for our country and have been biased in favor of statehood as the alternative.

As Puerto Rican women, we have been submitted to the multiple forms of gender oppression in our country, intensified by other forms of social inequity such as class, race, including in our case, our colonial subordination. Taking into consideration just the more recent periods, it has been Puerto Rican women who have disproportionately suffered the limits to resources and employment opportunities imposed by economic strategies enacted fundamentally to the extent that these have favored the benefits and interests of United States' capital and State. Given this, it is also Puerto Rican women who have been more vulnerable to poverty and the consequent dependency on the resources and services offered by the State— subjected to the political struggles for the United States 'government and denied and delayed even in the latest moments of natural disasters and the present Covid 19 pandemic. Access to our sexual health and rights and our reproductive rights have also been subjected to the fluctuations and cultural and political struggles in the United States in decisions that end up ruling over our own

legislation and jurisprudence and affect or own public discussion and policies. The increasing burden of family care and welfare is borne by women who face even more restricted options, endangering their own well-being and even the same reproduction of our people. The probability of facing violence in general and gender violence in particular increases under this condition of uncertainty and misery intensified by our colonial subordination. It goes without saying that it is women with less resources, black, and identified with non-binary gender who are most vulnerable to these conditions of poverty, repression, and violence. The colonial situation follows us even in the Diaspora in the United States, where, as a group, an important part of our population is maintained in the lower social, economic ranks, with lower indicators of health and welfare, racialized as non-white along with other Latin American migrants.

Project H.R. 2070 provides the opportunity for a broad and profound discussion for the enactment of a process of self-determination that may put an end to the Puerto Rican nation's colonial subordination. The election of delegates who represent the different status alternatives in a Status Convention must enable the development of their clear definitions, including the specific conditions implied by each option and their processes of transition, therefore allowing people an informed decision. It is important that in this discussion, and from the founding legislation of the chosen mechanism, a gender perspective and of the diverse conditions of social inequity is present, as well as an equitable representation of women. This may appear more complex and difficult, but it is the way to enable more participation and democratic spaces. The work of the people of Puerto Rico, accompanied by the mechanism of consideration by the United States 'Congress, on the other hand, should guarantee that the United States 'government undertakes a binding commitment with this process of Puerto Rican decision and self-determination.

*La Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT) es una entidad feminista creada en 1982 para reivindicar y ampliar los derechos de las mujeres, velar e interceder por los intereses de las mujeres que, como sector marginado y discriminado, en muchas ocasiones quedan fuera de los espacios de poder donde se toman las decisiones fundamentales sobre sus vidas. Como parte de esa agenda nos insertamos en las luchas por la equidad, la inclusión, la justicia y los derechos humanos de todas, todos y todes.*

**Antonio J. Fas Alzamora, J.D.**  
**Cabo Rojo, Puerto Rico**  
**(787) 312-0717**  
**tonyfasalzamora@gmail.com**

April 7<sup>th</sup>, 2021

Rep. Raúl M. Grijalva  
Chairman  
Committee on Natural Resources  
U.S. House of Representative  
1324 Longworth House Office Building  
Washington, DC 20515

**Re: Full Committee Hearing – April 14<sup>th</sup>, 2021**  
**H.R. 1522 and H.R. 2070**

Dear Chairman Grijalva and Committee Members:

As the Campaign Director of the “No to Statehood” Movement that formed in response to the non-binding plebiscite held in Puerto Rico on November 3<sup>rd</sup>, 2020, I wish to express to you all the sentiments of my fellow supporters of the “No to Statehood” Movement regarding **H.R. 1522**. Also, my opinion about **H.R. 2070**. I take on this role, not just as the Campaign Director, but as a former President of the Senate of Puerto Rico, having been the longest-serving senator of the Legislative Assembly of Puerto Rico – 40 consecutive years (4 years in the House of Representatives and 36 years in the Senate) – and also as a part of the Governing Board of the Popular Democratic Party, of which I’ve been a part of for the last 43 years.

#### **H.R. – 1522**

On behalf of the supporters of the “No to Statehood” Movement:

We do not recognize as valid and fair the plebiscite of November 3<sup>rd</sup>, 2020 nor its results. This plebiscite was held despite being rejected in advance by the United

States Department of Justice – meaning that it was always known to be a non-binding plebiscite – and yet still, undeterred, the New Progressive Party (PNP), the party representing the Statehood Movement, used this plebiscite as the lynchpin of their disinformation campaign which then propelled an election full of falsehoods and countless of electoral irregularities.

It should be noted that since the New Electoral Code was approved, four months prior to the plebiscite – despite the explicit opposition of all minority parties – the New Progressive Party then immediately and indefinitely assured itself of absolute control of the Puerto Rico State Commission on Elections (CEE). Of the total number of registered voters in Puerto Rico, only 52.8% of the voters participated in the plebiscite, and of that percentage of participation, 52.34% voted **Yes** to statehood. This means that **Yes** obtained 26.45% of the registered voters – clearly excluding citizens who are not registered but are still a part of the total population of Puerto Rico. If the United States decided to accept these results as valid, it would be akin to a cultural genocide from one nation to another. To eliminate a nation with more than 400 years of existence and become a minority in our own land is truly a despicable and unusual act.

Now, we recognize that it can be argued that what counts are the votes of those who participate in electoral processes and that interpretation is correct for temporary decisions such as in elections of public officials for different elective positions available in the government every two, four, and six years or for any decision that can be reversed. However, that same norm cannot be applied for a permanent and irreversible decision of such magnitude – the assimilation and disappearance of one nation into another – and even less so accepted in the United States, which does not allow secession as expressed in the United States Constitution.

A nation cannot be eliminated with only the will of 26.45% of all registered voters, on the contrary, a supermajority must be required.

The campaign carried out by the Statehood leaders was financed by undisclosed sectors, violating the self-determination of the people, using half-truths and falsehoods, as seen in the actions of “Self-Determination Inc. (SI),” “ERA-ELA, Equal Rights Access for Educational Leadership Alliance,” and “Professionals, Entrepreneurs, Academics and Workers for the Yes to Statehood.” They were plagued with falsehoods, threats, and fearmongering. At its core, the statement that was pushed was that voting **No** to Statehood would cause the loss of American citizenship and therefore the loss of:

- 1- The Federal Medicaid Program;
- 2- Federal Veteran Services;
- 3- 76% of Federal Medicaid Funds for 1.6 million beneficiaries;
- 4- The Nutrition Assistance Program and WIC for families with limited resources;
- 5- The Federal Unemployment Insurance;
- 6- Federal funds for the construction and remodeling of schools and hospitals;
- 7- Federal Head Start aid;
- 8- One billion dollars (1/3<sup>rd</sup>) in federal funds from the budget of the Department of Education for the payment of teachers' salaries, school canteens, and other special programs;
- 9- The PELL Grant Funds, Federal Loans, DNIH research funds, NSF, and NASA which would then cause the closure of public and private universities and colleges that depend on these funds to operate;
- 10- Federal Section 8 Public Housing subsidies for low-income families and federal funds for the construction, operation, and maintenance of more than 70,000 public housing units that house 400,000 people on the Island;
- 11- The presence of the Federal Emergency Management Administration (FEMA), the United States Army Corps of Engineers, federal funds to help those affected by natural disasters and to rebuild bridges and highways;
- 12- The federal jobs of those who work in these agencies on the Island;
- 13- The Federal Aviation Agency (FAA) and the funds for the construction and maintenance of our airports;
- 14- Homeland Security and its jobs in airports for the protection of our Island;
- 15- The loans guaranteed by the Small Business Administration and the Federal Deposit Insurance that guarantees bank deposits;
- 16- The protection of our civil rights and freedoms under the Constitution of the United States such as: freedom of expression and association, free press, Habeas Corpus, due process of law, the presumption of innocence, and free and safe elections. The protection of the FBI, the presence of the Federal Prosecutor's Office and the Federal Court of Puerto Rico, as well as the position of Resident Commissioner.

Another false argument that they used was to say that Statehood is a case of civil rights. On the contrary though, it violates the collective civil rights of a country by not allowing it to maintain its language, culture, and national identity with its unique international presence, and preserve its historical continuity as a nation.

The campaign that I directed lasted 21 days, all income and expenses were duly reported to the Puerto Rico State Commission on Elections and it was \$27,545.00 in expenses, versus, a campaign that invested millions of dollars and lasted more than two months in favor of Yes. In a democracy there has to be an equal balance in campaign time, funds and accurate information when it comes to the future of the existence or disappearance of a nation. The exercise of self-determination of a people, in accordance with International Law, must be exercised under equal conditions for all political ideologies.

On the other hand, we must remember that the nationality of a people is not conditioned to its political, economic or legal reality. A nation is formed when a group of human beings share the same ethnic, cultural, sociological origins, the same language, and live in the same territory. Puerto Rico is a Nation. We are a society with unique and distinctive characteristics and behaviors from the rest of the world.

The Puerto Rican Nation was formed from a racial, social, and cultural mixture that over the years began to manifest itself in literature, music, and the arts. From there, our customs and traditions have manifested for generations, developing a unique history, with the Spanish language as our vernacular, which defines us as a Caribbean and Latin American Nation.

Puerto Ricans, although we have adopted some traits of other cultures in recent times, have refused to succumb to transculturation. We are Puerto Ricans first and our Homeland is Puerto Rico. It is not, as some like to say, that we are American citizens who live in Puerto Rico. No, we are Puerto Ricans who live in our nation and we have American citizenship.

At the international level, Puerto Rico, its flag, and its national anthem are recognized in cultural, artistic, and sports competitions. We have our own Olympic Committee, and our music, singers, and artists are known throughout the world as Puerto Ricans. We are members by right of world and regional organizations such as the International Olympic Committee, international sports federations, international artistic and cultural entities, the Parliamentary Confederation of the Americas, among others.

Our condition of nation dates back more than 400 years, existing since before 1776 when the United States of America was formed. Puerto Rico and the United States are two different nations, and their inhabitants hold American citizenship since 1917.

In summary, the campaign in favor of Statehood was based on fear, half-truths, falsehoods, and threats. The economic disparity was clearly in their favor in order to ensure that they prevailed. Their campaign was supported mainly by Political Actions Committees (PAC) of unknown origins, which did not allow for transparency regarding who they were and what their intentions were. At its core, the campaign had one singular purpose: that Puerto Ricans stop being what we are and become something else, violating the right to self-determination of the people, and pushing us to become a minority in our own homeland.

## H.R. 2070

When it comes to **H.R. 2070**, we support this bill because it removes Puerto Rico from the territory clause of the United States Constitution. To be in that clause is to be a colony of the United States of America. In my opinion, to become a State of the Union would be the culmination of Puerto Rico as a colony and economically a disaster (GAO- March 2014). The majority of my fellow Puerto Ricans want to preserve our Puerto Rican nationality, increase our international presence, and maintain our U.S. citizenship by birth.

That can be possible if there is a political will to accept a Compact of Association between the Governments of the Free Associated State of Puerto Rico and the United States of America, that was presented on March 8<sup>th</sup>, 2020 and is based on Resolution 2625 (XXV) of the General Assembly of the United Nations, dated October 24<sup>th</sup>, 1970, which is still in effect and backed by the United States. It also establishes in the “Principle of Equality of Rights and Free Determination of People,” a fourth option that mentions, “the acquisition of any other political condition freely decided by a people, constitutes forms of the exercise of the right of self-determination of that people.” You can find the Compact in its entirety at [www.pactodeasociacion.com](http://www.pactodeasociacion.com).

The Compact is in legal format and in detail. It is a proposal to discuss how a type of Association could take shape in accordance with both International Law, as established in the Compact, and the Constitutions of the United States of America and of the Free Associated State of Puerto Rico. It is not necessarily a final document, and, like any proposal, it is open to comments, amendments, and suggestions in order to improve it.

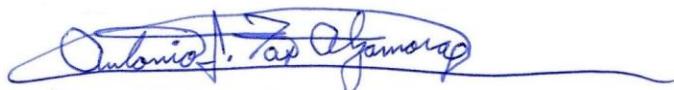
Establishing a permanent, dignified, and democratic relationship, as the one I propose in the Compact, is beneficial to both nations. The United States would

have the moral strength to proclaim itself as the true champion of democracy and human rights in the world by ceasing to be a colonial metropolis. In turn, Puerto Rico ceases to be a colony, occupying for the first time, in its own right, its unique seat in the global community.

I repeat, political will is the key to achieving the transformation to a non-colonial, non-territorial status option for the benefit of both the United States of America and Puerto Rico. Our proposal of the Compact of Association, which I respectfully request be included as part of the record of this hearing, could be very important in developing the type of relationship that most Puerto Ricans would truly support.

I am available to participate in the hearing of April 14<sup>th</sup>, 2021 through any online format and I look forward to collaborating in the future with the Committee.

Cordially,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antonio J. Fas Alzamora". It is written in a cursive style with a horizontal line underneath it.

Antonio J. Fas Alzamora, J.D.  
Former President of the Senate of Puerto Rico (2001-2004)

c: [Brian.Modeste@mail.house.gov](mailto:Brian.Modeste@mail.house.gov)  
[Margarita.Varela@mail.house.gov](mailto:Margarita.Varela@mail.house.gov)

Austin González, 28, Virginia, 22407

Greetings everybody, it is an honor to be here alongside you all today in support of this courageous effort to resolve the colonial status of Puerto Rico. My name is Austin González, I am an activist from Richmond, Virginia and I am here to represent the Democratic Socialists of America of which my fellow diasporican Alexandria Ocasio-Cortez is also a member. The Democratic Socialists of America is the largest socialist organization in the United States and is one of the most influential progressive moments of the last few years. We have elected multiple members of congress and spearheaded various campaigns to improve workers' rights, healthcare rights and most importantly human rights, which is partly why I am here today. I serve on the highest elected body of the DSA and it is with great pride that I say our organization has made it a priority to support the congresswoman in her efforts to co-sponsor this important legislation and help educate the progressive community in the United States about why this bill is important and why a fair self-determination process made by and for Puerto Ricans is the only way to resolve the colonial status of Puerto Rico, once again in that pursuit of defending and uplifting human rights.

As a member of the Puerto Rican diaspora it is a great honor to be speaking here alongside so many incredible organizers both within the diaspora and from the islands, i know it has been a long journey to get us to this point but I come here with great joy because I come here knowing that for the first time in my lifetime we have a real opportunity to resolve the colonial status of Puerto Rico with this legislation that Congresswoman Ocasio-Cortez and Congresswoman Velasquez have presented.

The Puerto Rico Self-Determination Act is the only legislation in Congress that outlines an actual path toward resolving the status of Puerto Rico. Rather than bestowing a single option upon Puerto Ricans or relying on undemocratic referenda, the PRSDA outlines a process for a status assembly which puts the decision back into the hands of Puerto Ricans. It is for these reasons that these same ideas presented within the PRSDA have enjoyed support among the people of Puerto Rico for a very long time across many different political spectrums on the islands. This legislation does not put the thumbs on the scales for any particular option, rather it gives Puerto Ricans the ability to see once and for all what the full implications of each option would be and to then decide amongst themselves what the most appropriate path forward should be.

This here is exactly what the Puerto Rican people need most of all, a fair self-determination process that fully outlines what each option truly means for the people living on the islands. Whether that outcome be statehood, independence, or free association, Puerto Ricans have a right to know exactly what will happen to their future upon which outcome they decide upon. The PRSDA is the only bill that treats each option fairly, and more importantly treats the Puerto Rican people with the respect that they deserve.

For far too long Puerto Ricans have lived with uncertainty over what the future may hold. After the Hurricanes the only thing that the Puerto Rican people had was each other. And i truly believe, that in those darkest of times, Puerto Ricans proved definitively, once and for all, that we have the ability to take our destiny in our own hands. We do not need Congress passing laws deciding which option we should pick. What we need is Congress recognizing our right as a people to decide that path for ourselves.

Austin González, 28, Virginia, 22407

Once again I reiterate how honored I am to be here, the son of a quite literal jíbaro family from the borders of Jayuya and Ponce. My family was forced out due to the same economic reasons that so many other families have been. It is time once and for all that we end the displacement and decide a path forward that is ultimately decided by and for Puerto Ricans and I believe that is only possible with this legislation here. Thank you.

## La descolonización de Puerto Rico frente al federalismo norteamericano.

Buenos días compatriotas puertorriqueños(as), Señores Congresistas. Soy Eduardo Villanueva Muñoz, abogado puertorriqueño y por años he sido profesor de Derecho en tres de las cuatro escuelas de Derecho, que había en mi país. He enseñado varios cursos incluyendo derecho constitucional y por muchos años, sociología del derecho en la escuela de Derecho de la UPR.

Quiero en el día de hoy, analizar la Asamblea constitucional de status, en el marco del federalismo Norteamericano. Puerto Rico ha estado sometido a un régimen colonial bajo el federalismo Norteamericano desde 1898. Eso marca cualquier discusión que se quiera hacer sobre la posibilidad de convertirnos en un Estado federado o de tener una relación de mayor autonomía o incluso poderes soberanos bajo el Estado Libre Asociado.

En Estados Unidos, luego de la guerra de independencia de las trece colonias, se celebró una asamblea constituyente cuyas memorias se escondieron por cien años. De la misma, surgió el sistema federal que agrupó a las trece colonias y permitió la expansión de un país que ya aspiraba a convertirse en una nación Estado, es decir, un gobierno central con soberanía propia, que agrupara varias etnias para ser identificadas como una sola nación. Por la unión de esa nación se peleó una guerra civil, algunos de cuyos efectos aún perduran en la actualidad donde se muestra división entre el Norte y el Sur de ese país.

Bajo la doctrina de los llamados casos insulares<sup>1</sup>, desde inicios del siglo XX, Puerto Rico ha sido considerado un territorio no incorporado, que quiere decir precisamente que no es parte de la federación. En su concepción bárbara del derecho interno, el gobierno federal entiende que somos una pertenencia suya. Eso claramente implica, significa, la existencia de un gobierno colonial.

---

<sup>1</sup> Algunos ejemplos de los primeros casos insulares: *Downes v. Bidwell* (1901) es *De Lima v. Bidwell* (1901). En *De Lima v. Bidwell* (1901), la Corte Suprema determinó que "Puerto Rico era parte de los Estados Unidos a los efectos de la Cláusula de Uniformidad". Por lo tanto, no se pudieron cobrar aranceles a Puerto Rico. La Corte Suprema sentó precedentes alternativos en *Downes v. Bidwell* (1901) y *De Lima v. Bidwell* (1901) basándose en la interpretación diferente de la Cláusula de Uniformidad de la Constitución de los Estados Unidos y las implicaciones posteriores de estos fallos.

En *Balzac v. Puerto Rico* (1922), la Corte Suprema determinó que los puertorriqueños, con la ciudadanía estatutaria extendida por la Ley Jones (1917), no tienen garantizado un juicio por jurado, un aspecto inherente de la Constitución de los Estados Unidos. De manera similar, en *Dorr v. Estados Unidos* (1904), la Corte Suprema falló en contra del derecho a un juicio por jurado para los residentes de Filipinas, otro territorio no incorporado en ese momento. Estos dos casos ejemplifican la idea implementada por los Casos Insulares de que la Constitución no se extiende automáticamente a los territorios "ex proprio vigore", ni por su propia fuerza.

“La Resolución 1514 XV de la [Asamblea General de las Naciones Unidas](#) (también conocida como Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales) fue una piedra angular del [movimiento de descolonización](#). Aprobada el 14 de diciembre de 1960, esta resolución hacia un llamamiento a la independencia de las colonias, considerando los derechos humanos fundamentales y la carta de las Naciones Unidas. □

La resolución declara que la sujeción de los pueblos a dominio extranjero es una denegación de los [derechos humanos](#) fundamentales, es contraria a la [carta de las Naciones Unidas](#) y compromete la causa de la paz y la cooperación mundiales. Así mismo, la resolución especifica que todos los pueblos tienen [derecho a la libre determinación](#), y que se deben tomar medidas para traspasar el poder a los pueblos colonizados, sin condiciones y sin represión de por medio”<sup>2</sup>.

Estados Unidos no se fundó para ser una nación de naciones. Al contrario, la federación se creó para absorber los poderes soberanos fundamentales de las trece colonias y así lograr convertirse en una nación Estado<sup>3</sup>. Un gobierno con soberanía y una nación que los unificaba a todos. Ese es uno de los fundamentos más estudiados y argumentado sobre porque no conviene a los intereses de EE UU, ni a los de Puerto Rico, que nos convirtamos en un Estado Federado. Sería la absorción de una nación por otra, con las consecuencias de tensión interna que se conocen en otros países como España, Irlanda y varias colonias inglesas y holandesas que aun quedan. Veamos la definición de nación para explicar porque Puerto Rico es una nación que dejaría de serlo en sentido sociológico si se convierte en un Estado y es absorbido por la federación.

“Nación es el **conjunto de personas que se identifican con un territorio, idioma, raza y costumbres**, constituyendo generalmente un pueblo o un país.

Una nación se caracteriza por la identidad cultural, social, histórica y política de un pueblo. En este sentido, se puede definir el sentimiento

---

<sup>2</sup> ↑ «A/RES/1514(XV) - 5». undocs.org. Consultado el 2 de enero de 2019.

<sup>3</sup> Estado es un concepto que se refiere a la organización política que integra a una población en un territorio bajo una autoridad. Nación es un concepto histórico y cultural, que hace referencia al conjunto de personas que tienen en común una lengua, una historia, una cultura y un conjunto de tradiciones.

<https://www.diferenciador.com/diferencia-entre-estado-y-nacion/>

de una nación como el parecer de un grupo de personas que comparten lazos con los cuales se identifican culturalmente".  
[https://www.significados.com/nacion/.](https://www.significados.com/nacion/)

En las vistas sobre el proyecto Johnston,(1989), el PIP, a través de su presidente, Rubén Berrios, advirtió: El asunto fundamental para Estados Unidos es qué tipo de relación jurídica y política está dispuesto a contraer con un pueblo que constituye una nacionalidad históricamente distinta, que habita un territorio distinto y separado, que habla una lengua diferente, que aspira a preservar una identidad propia, y cuyos habitantes resultan ser -aunque no por elección propia- ciudadanos de Estados Unidos.

Este conflicto de nacionalidades nos lleva a examinar varias acepciones que se manejan en la discusión del status y que no son enteramente correctas. La primera es que el reclamo de Estadidad es un asunto de derechos civiles. Se alega que por ser ciudadanos americanos, tenemos derecho a ser Estado. Ese argumento no aguanta análisis, porque si fuera cierto, todos los ciudadanos americanos que habitan en otros países soberanos por arreglos de Estados Unidos con esos países, tendrían derecho a reclamar la formación de grupos al interior de esos países para reclamar que le permitan convertirse en Estados Federados.

Los que así argumentan olvidan que EE UU., es una república y que como tal, también tiene derecho a auto determinarse. Ello implica el derecho a decidir si quiere crecer, cómo y con quienes expandirán la familia de los Estados. Esa decisión tiene derecho a tomarla conforme a sus intereses geopolíticos y no por imposición de otro país, de una nación diferenciable como es Puerto Rico. Las palabras asfixian el debate, pero la decisión es sencilla: ¿necesita EE UU anexar a Puerto Rico? ¿Qué le aporta Puerto Rico a sus intereses que ya no tengan con el ELA?, que es un status que se creó para sus conveniencias militares y económicas.

La decisión de anexar a Puerto Rico no es buena ni para los norteamericanos ni para los puertorriqueños. Repasemos un informe que preparó el departamento de economía de la UPR en abril de 2014. En sus secciones pertinentes revela lo siguiente:

### **Estudio UPR confirma el daño de la estadidad para Puerto Rico**

"Se vuelven a confirmar las consecuencias negativas que tendría la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. Aumento en los pobres, cambio en la estructura fiscal que dejaría a un gobierno más pobre, reducción en el

empleo público, una carga contributiva muy pesada para las pequeñas y medianas empresas (PYMES)...<sup>4</sup>

### **La estadidad y el régimen fiscal**

La investigadora Dra. Eileen Segarra Alméstica, directora interina del Departamento de Economía, presentó el aspecto del impacto de la estadidad en la estructura fiscal de Puerto Rico.

Segarra señaló que la estadidad conllevaría un aumento en las transferencias del llamado Gobierno Federal de Estados Unidos al Gobierno de Puerto Rico y a las personas, pero también la aplicación total de la estructura contributiva federal a las personas y a los negocios en la Isla, lo que significa un cambio en el régimen fiscal que plantearía serios retos a ambos gobiernos. El reto surge porque ya la Isla es una jurisdicción con una alta dependencia de los fondos federales y con una capacidad limitada para solventar los gastos corrientes de la administración pública con el sistema contributivo vigente.

La investigación de los aspectos fiscales reveló que aunque las transferencias del Gobierno Federal al Gobierno de Puerto Rico son comparativamente bajas al contrastarse con lo que reciben los 50 estados, sin embargo éstas representan una proporción bastante alta de los ingresos fiscales totales. En el 2011, los fondos federales aportados al Gobierno de Puerto Rico representaron \$1,222 por habitante. Esta cifra es menos de la mitad de lo que recibió el estado más pobre, Misisipi. Si Puerto Rico hubiese recibido en promedio la misma cantidad de aportaciones federales por habitante que recibió Misisipi en el 2011, esos

---

<sup>4</sup>Fue precisamente el debatido informe de la Oficina General de Contabilidad del Congreso de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), sobre el impacto de la estadidad para Puerto Rico en el presupuesto de EE UU, lo que motivó al director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE), licenciado Francisco Chévere, a comisionar al Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, el informe “Efectos sobre la competitividad de Puerto Rico de posibles cambios en la ley 600”....

## **People's Hearing on PR Self-Determination**

Tuesday, April 20, 2021

Gladys Franco

Age: 40

Zip Code: 01108

Good morning. My name is Gladys Franco. My pronouns are she/her/ella. I am an educator, community organizer, and cofounder of the Boricua Solidarity Movement, a non-partisan movement of the people, composed of a diversity of Boricuas, allies, and the support of community organizations, uniting to address the challenges affecting Puerto Rico and the diaspora.

I migrated to Springfield, Massachusetts in January 1992. Massachusetts has the fifth-highest concentration of Puerto Ricans in the U.S. outside of the archipelago with over 340,000. Self-determination is an issue that matters to us and those we care about and that is why we support the Puerto Rico Self-Determination Act of 2021 HR.2070/S.865.

Like many other Puerto Rican families, mine came to the U.S. looking for economic opportunities. Living here, enabled me to realize the inequities that exist between Massachusetts and Puerto Rico which are a result of the US invasion of the archipelago and the subsequent regressive federal laws imposed against Puerto Ricans.

Per the Laws of Cabotage in the Jones Act, the movement of cargo to and from Puerto Rico must be done by U.S. built, owned, flagged, and crewed ships. The goods and materials imported to Puerto Rico in U.S. vessels are much higher in price than those transported in foreign vessels. This results in costs 2.7 times what would be paid for food, medicine, clothing, materials, and other imported products were they transported on ships on the international market. All the residents of Puerto Rico are greatly affected by these higher prices which do not help the economy to develop.

The U.S. government and companies benefited for decades from tax exemptions in Puerto Rico under section 936 of the U.S. tax code while the residents of Puerto Rico live daily with the effects of a multi-billion dollar government debt. Puerto Rico is not eligible for Chapter 9 bankruptcy protection and US Federal Courts have ruled against allowing Puerto Rico to establish its own bankruptcy code.

Residents of Puerto Rico pay the same in Medicaid and Social Security taxes as those in the mainland, but they are excluded from the Supplemental Social Security benefits and only get about half the rate of federal health care dollars. Per-capita Medicaid benefits are 70 percent below the U.S. average and the per-capita Medicare Advantage benefits are merely half of what people receive in the States. Once the federal block grant funding that Puerto Rico receives is exhausted, it must use its own funds to pay the entire remaining cost of Medicaid health care services.

Under the PROMESA law, the federal government appointed individuals to a Financial Oversight and Management Board, some of which have conflicts of interest and are focused on austerity measures that further impact the working people of Puerto Rico. The FOMB is too far removed from Puerto Rico's communities to properly identify needs and allocate resources.

Per the 2016 Report on Puerto Ricans in Massachusetts, the United States, and Puerto Rico, "Mean earnings are almost \$20,000 higher per year for Puerto Ricans in Massachusetts (\$55,831) than in Puerto Rico (\$36,767). Per capita income is also higher in Massachusetts."

Despite being US citizens, Puerto Ricans are not able to run for the U.S. presidency. Residents of Puerto Rico are also not able to vote for the U.S. President nor have a vote in the U.S. Congress. Puerto Ricans residing out of the archipelago are also not able to vote in Puerto Rican elections.

The long-term solutions to Puerto Rico's economic and quality of life problems are tied to the resolution of our current colonial relationship with the United States. Decolonization will enable Puerto Rico to progress economically and politically.

Despite 123 years of U.S. oppression, the spirit of resistance and the struggle for self-determination lives on in the people of Puerto Rico and the diaspora. The people of Massachusetts played a central role in the fight for American independence from Great Britain and now the people of Massachusetts stand in solidarity with the people of Puerto Rico in support of self-determination. Momentum is building here in Massachusetts, with 17 community organizations and counting, having pledged their support:

- The Boricua Solidarity Movement
- The Resistance Center for Peace and Justice
- The Ethnic Study
- Rise up Western Mass Indivisible
- Valley Women's March
- 01027 - A Knee is Not Enough
- Arise for Social Justice
- Estoy Aquí
- Neighbor to Neighbor
- Pioneer Valley Project
- Pioneer Valley Workers Center
- Nueva Esperanza
- La Diaspora
- Latin America Solidarity Committee of Western Mass
- Alianza por Puerto Rico - MA
- Inquilinos Boricuas en Acción
- Mijente Boston Asamblea

It also has bipartisan and overwhelming support from Boricua leaders and allies including members from the MA congressional delegation: U.S. Representatives Ayanna Pressley, Jim McGovern, and Richard Neal, and U.S. Senators Ed Markey and Elizabeth Warren, and as evidenced by five municipalities across the State, thus far, having passed resolutions in support: Springfield, Easthampton, Holyoke, Worcester, and Boston.

Puerto Rico's colonial status has been a stain on the democratic ideals the United States endeavors to live by and uphold. Although there is no perfect path to resolve the colonial status of Puerto Rico, the Self-Determination Act would ensure an inclusive, transparent, process for all Puerto Ricans to define their own destiny. The United States Congress has the constitutional power to address this issue and it has a moral imperative to correct this democratic deficit.

The Self-Determination Act of 2021 is a real step towards decolonization with Puerto Ricans leading a process that includes all options. It will ensure a transparent and inclusive process for the people of Puerto Rico to discuss and come up with solutions to many unanswered questions.

As a proud Boricua in the diaspora, I thank you for the opportunity to present my position and I ask that the people and the US government support the process of decolonization through the Self-Determination Act of 2021 (HR.2070/S.865).

fondos hubiesen representado el 58% de los ingresos gubernamentales. Para Misisipi en ese mismo año las transferencias federales representaron el 37% de sus ingresos gubernamentales.

La Dra. Segarra Alméstica comparó que si el gobierno de Puerto Rico hubiese recibido en el 2011 la misma cantidad de transferencias por habitante que recibieron en promedio los estados (\$2,098), las transferencias hubiesen aumentado de \$4,482 millones a \$7,750 millones. Apuntó que en la medida en que el gobierno de Puerto Rico aumente su dependencia de las aportaciones federales se reduce aún más su autonomía en la implantación de política pública.

En términos contributivos, el estudio reveló que bajo la estadidad todos los renglones contributivos en Puerto Rico aumentarían. La carga contributiva total de impuestos a individuos y corporaciones como porcentaje del ingreso personal aumentaría de 17.5% al 30.6%.

La extensión del impuesto federal a la Isla aumentaría la carga impositiva para los contribuyentes con ingresos medios y altos.

La investigación confirmó, además, que:

Las corporaciones radicadas en Puerto Rico sujetas a contribución regular podrían pagar \$758 millones al fisco federal.

Las empresas radicadas en Puerto Rico que hoy reciben incentivos contributivos tendrían que pagar impuestos sustanciales al gobierno federal. En el 2011 estas empresas aportaron \$306 millones al fisco de Puerto Rico. Se evidenció que una vez estas empresas estén sujetas al pago de contribuciones federales, la ventaja competitiva de Puerto Rico para retenerlas se afectaría de manera significativa.

La ley 154 del 2010 también quedaría anulada. Esta ley impone un arbitrio a personas y corporaciones no residentes o sociedades extranjeras en la Isla. En el 2011 el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) permitió que este arbitrio se les acreditará a las empresas bajo el amparo de las Secciones 901 y 903, mientras se evalúa la aplicabilidad y constitucionalidad de dicha ley. El arbitrio generó en el 2011

recaudos por \$667.9 millones y en el 2012, \$1,883 millones, lo que equivale al 23.5% del total de los recaudos contributivos del Gobierno de Puerto Rico. La investigación concluyó que la reducción de este recaudo de las corporaciones foráneas tendría un efecto detrimental en los ingresos fiscales de la Isla....

### **Confirmados los hallazgos del GAO**

En tanto, el economista y profesor Juan Lara Fontanez destacó las coincidencias entre el estudio académico y el estudio que hizo el GAO y apuntó que básicamente se complementan. Se refirió a que las coincidencias y diferencias se encuentran en las áreas del enfoque, cobertura, metodología, hallazgos, recomendaciones y las conclusiones que hace el estudio académico.

En lo que respecta a enfoque y cobertura, dijo que es importante que en ambos casos se está hablando de los efectos económicos de la estadidad con atención a los cambios de los aspectos fiscales del Gobierno de Puerto Rico e implicaciones fiscales para el Gobierno de EE UU. Observó que el estudio del GAO es más restringido que el de la UPR. El GAO hace un cálculo en los gastos potenciales de programas federales y en los cambios potenciales en las fuentes de ingresos del Gobierno Federal si la Isla se convierte en un estado, pero no define el alcance.

“Aquí le dieron atención al tema de la competitividad y lo que puede significar la convergencia de la economía de Puerto Rico con la de Estados Unidos con la estadidad; si la estadidad aceleraría o no la convergencia de la economía de Puerto Rico con la de Estados Unidos, lo que podría significar para las pequeñas y medianas empresas y el empresarismo en Puerto Rico”, describió.

En cuanto a las diferencias, el doctor Lara Fontanez destacó que aun cuando se usaron métodos distintos las conclusiones son iguales lo que significa que los hallazgos son robustos y que no dependen de la estrategia, en particular en los que se refieren al tema fiscal en donde hay más coincidencias en los resultados en términos cuantitativos y cualitativos.

Sobre los hallazgos en el tema fiscal, Lara reiteró las coincidencias entre el estudio del GAO y el de la UPR en que queda claro que con la estadidad habría un efecto fuerte de la carga contributiva federal en los individuos y las corporaciones y en la relocalización de las empresas que operan en la Isla para evadir la carga contributiva federal. Un aspecto en el cual el estudio académico hizo énfasis y que no hizo el GAO es que en caso de que la Isla sea Estado es necesario reformular el sistema fiscal de Puerto Rico porque sencillamente no se podría quedar el sistema actual y por lo tanto habría que reestructurar el tamaño y las áreas de servicios del gobierno..."

Algunas conclusiones finales;

La Estadidad como reclamo del pueblo de Puerto Rico aún es minoría dentro del universo electoral de Puerto Rico. Veamos un artículo del Profesor E Pantojas sobre los plebiscitos de status.

### **Las consultas de estatus bajo el PNP: 1993-2020**

"Alentados por el triunfo electoral de 1992 el PNP celebrará otro referéndum de estatus en 1993. El resultado no fue el deseado, pero si muy alentador. El ELA ganó el referéndum, aunque se quedó por debajo del 50%, reduciendo su mayoría por 11.5%. La estadidad aumentó su apoyo por 6.5%. (Ver tabla 2)....A partir de la consulta de 1998, el PNP definiría las fórmulas de estatus a su antojo sin consultas ni consensos. Su objetivo sería dividir el voto del ELA, ya que el voto independentista había decaído. La dependencia de transferencias federales, iniciada en 1974 con la extensión de los programas de ayuda nutricional (cupones de alimento) y subsidio a la renta (sección 8) para familias e individuos bajo el umbral de pobreza habían sellado la preferencia del electorado por la "unión permanente" con Estados Unidos, bien bajo el ELA o bajo la estadidad. Recordemos que cerca del 50% de los/as puertorriqueños/as viven bajo el umbral de pobreza estadounidense, por lo cual son elegibles para estas ayudas. Las contiendas electorales a partir de entonces girarían en torno a cuál partido allegaría más prestaciones sociales financiadas con fondos federales.

Desde el referéndum de 1998 en adelante, el ELA se presentará dividido en dos alternativas, soberano y territorial, o se juntará el "ELA soberano" con la independencia. En las campañas plebiscitarias el discurso anexionista (pro-estadidad) el ELA soberano y la independencia se asociarán con la ruina del país por la pérdida de ayudas federales y de la ciudadanía estadounidense. Los "soberanistas", como los independentistas serán tildados de "Chavistas" en alusión al líder venezolano Hugo Chávez y el proyecto de "socialismo del siglo veintiuno". También se les tildará de

Before the House Natural Resources Committee , Hon Raul Grijalva, Chairman

Good afternoon Mr. Chairman and all members of the Committee.

Today, we appear on behalf of the Alliance for Free Association (ALAS) an association in Puerto Rico that for several decades has advocated for a new political relationship with the US based on a Treaty of Free A as negotiated with the US. ALAS was the official representative of the Free Associated State option ( Estado Libre Asociado Soberano) on the ballot in the 2012 plebiscite held in the island. A total of 454,768 voters endorsed this non territorial option, clearly outside of the territorial clause of the US Constitution. A spectacular showing for a decolonizing option for the first time in the ballot.

Today, we would like to endorse HR 2070 as the main federal legislative vehicle in 123 years to explicitly recognize our right to self-determination and to set federal parameters (Status Convention) and a formal official conversation with a Bilateral Negotiating Commission to continue in place until the preferred self-determination option is approved by the people of Puerto Rico in a referendum and is ratified by Congress.

In regards to HR 1522 also under consideration today, ALAS believe it should be tabled since said bill is the result of an undemocratic effort by the New Progressive Party (NPP) to impose statehood on Puerto Rico without regard to the other decolonizing political options. In recognizing this serious blemish in the above mentioned undemocratic effort the U.S. Department of Justice (DOJ) agreed and rejected the request of the govt of PR to use the set aside funding appropriated in 2014 , to educate on all decolonizing options in a future plebiscite , to decolonize Puerto Rico.

A 52% simple majority is a very weak showing in signaling Congress their desire to be a state, considering the YES Campaign was basically running unopposed. In fact , if you add the 40,000 ballots handed without casting a vote, the pro statehood vote is reduced to 50.5 %. Furthermore, the 52% basically becomes 28%, when considering that more than 45% of those registered to vote were not attracted to vote in what was perceived a rigged effort to force a *yes* vote. Also, Congress must demand the NPP to explain why 52% in 2020 should carry the day when in 2017 they alleged 97% of the electorate supported statehood. So now 52 % , a 45% reduction in support is better than 97%. Their explanation will most likely support the premise that in both occasions their initiatives were rigged.

HR 2070, on the other hand, is an honest broker to reach, via negotiations between the US government and the duly elected delegates by the People of Puerto Rico, an agreement of a new political relationship with the US, outside the territorial clause of the US Constitution. Puerto Rico must have a transparent effort of self determination, not an electoral event to serve the NPP or any Party for that matter. There is too much at stake due to the irreversible nature of the process and thus consideration only of real decolonizing options is of the essence.

But, we do have a few recommendations for amendments in order to improve HR 2070 :

1. The US Department of State should be represented in the Bilateral Negotiation Commission under section 4;
2. Include in the Findings under section 2 a reference to United Nations ( UN ) Resolution 1514 (XV) of 1960 as it declares that “All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status...” ;
3. Also, under Section 2 Findings a reference to the Principles under UN Resolution 1541(XV) clearly enumerating under Principle VI the three

political options under which can be said a non self governing territory to have reached a full measure of self-government;

4. Under Section 6, Congress Deliberation and Enacting Resolution a paragraph should be added declaring the obligation of the US to resume transmitting information under Article 73 e of the UN Charter if Congress fails to ratify the preferred self-determination option as approved in the referendum vote;
5. Congress needs to clarify in Section 6. Congressional Deliberations and Enacting Resolution , that once the preferred option is ratified by Congress and approved in a referendum vote by the people of Puerto Rico , the obligation of the US government to appoint a Negotiating Team to negotiate the specific provisions which will control the relation of the US and Puerto Rico under the ratified option. For example, a Free Association agreement has to be negotiated by the US government . most likely the Executive branch, and it would be meaningless if the preferred option as ratified by Congress and approved by the people of PR , would have no mandate directed at the Executive branch to follow up with a negotiation to execute the will of the people of PR and the US Congress.

ALAS favors a treaty of Free Association with the USA as the decolonization option for PR. Free Association is a distinct and separate option from independence as

clearly stated in the Resolution 1541(XV ) of the United Nations of 1960. No doubt that Free Association is a viable option , as it is evident from the three treaties of Free Association the US has in effect with three countries in the Pacific area. Free Association is not only a viable option under the US Constitution, it is one which the US has already implemented under its constitutional authority.

Thank you for the opportunity to present testimony on behalf of ALAS endorsing HR 2070 with the amendments herein recorded. We also plea for Congress to reject any amendments which will maintain Puerto Rico under the territorial clause, insist in tabling the Bill introduced by the Hon Darren Soto and disregard bias opinions from lawyers who may need to read the constitution again.

Sen Jose A. Ortiz Daliot for ALAS

Justin Maldonado, age 43 , NYC

*{Intro}* Good morning everyone! My name is Justin Maldonado, I'm part of a collective called Cancel the Debt that has been fighting to remove the odious and illegal debt Puerto Rico has been attached with, since the United States Army charged Puerto Rico to pay for the recovery of the 1899 Hurricane. For the past 122 years, Puerto Rico's position on it's own sovereignty has always been held through the paradigm of trying to balance economic and cultural survival. The basic need to put food on the table with the instinctual and human need to define what it is to be oneself.

*{About The Bill }* The H.R. 2070 bill provides real resources to the Puerto Rico legislature to conduct a constitutional status assembly, which would have elected representatives by the people of Puerto Rico who support different outcomes. They would define the options and the specific terms before Puerto Ricans cast their votes. H.R. 2070 would also promote the use of ranked-choice voting for the final referendum. With this in mind, Puerto Rico would be able to make an informed decision based on facts and knowledge, not scare tactics and myths. Under either its current status as a colony or as a state, Puerto Rico can discover natural resources under its land, and would neither be able to protect their land, nor be able to profit off the sale of such resources if it chose to do so. If Puerto Rico wants to trade with other

countries, it must funnel through the United States. What is the economic impact of that? We have no idea, and pushing either statehood or any other non-colonial option would be making a decision without being informed of critical data.

If Puerto Rico wants to accept help from other countries, that too must also funnel through the United States. When Hurricane Maria ripped through the island, other countries were turned away because of the red tape that comes with being attached to the United States. How many people died from this red tape? How many more people will suffer?

All of these elements have to be presented to the citizens of Puerto Rico, so that they can make an informed decision.

The bill would provide a binding self-determination process, in which all non-colonial options can be compared objectively, and in which Puerto Ricans can make an informed vote and Congress would then act upon the will of the majority.

The discussion regarding Puerto Rico's future has always been viewed through the lens of acceptance of entry from the United States. This

has resulted in a slanted argument based on a binary decision and since the choice for Puerto Rico's future has always come down to statehood or colonization. The option of self-rule or sovereignty has always been the boogie-man waiting to eat Puerto Rico in the dark.

What this bill does is to simply turn on the light in the room. Let us see what these options really present for Puerto Rico's future. At that point, Puerto Ricans can cast a vote as to what option THEY prefer. If no choice wins over 50%, ranked choice voting would be enabled among the top 2 choices. At that point, Puerto Ricans would be able to make a binding vote on their future.

*{Conclusion}* As it is right now, Puerto Rico would have to decide if PR wants to join the US, which would then go through Congress, then the Senate, and finally the President. On several occasions, members of both United States political parties have expressed concerns regarding allowing Puerto Rico into the union. Many have expressed concern that the United States should not "bail out" Puerto Rico from its debt, and that the debt is a reason to not allow entry. The solutions these same politicians present, only perpetuate the debt crisis, leaving Puerto Rico in a never ending loop of asking permission to sleep in a house they helped to build.

The current Senate Majority Leader Chuck Schumer said no to a statehood bill for Puerto Rico this past February. The previous Senate Majority Leader Mitch McConnell in 2019, called it full-bore socialism. Corey Booker, a Democrat Senator from New Jersey also said this was not the right time to bring up the status issue. Former President Donald Trump on repeated occasions said “absolutely no” to Puerto Rico becoming a state. Politically, Puerto Rico’s case for statehood in the US is essentially homeless. For anyone to even allude anything to the contrary, is frankly intellectually dishonest. Which would mean HR1522 is a bill that is dead on arrival, and frankly a waste of time. Puerto Rico has fought valiantly for the freedoms enjoyed by the very same colonizing country that denies it for them. This is a loop that needs to be cut.

{Bonus} During the recent legislative hearing in support of HR 1522, José Fuentes Agostini attempted to make a false equivalence between Puerto Rico and Hawaii/Alaska's path to statehood. After pointing out that support for statehood exponentially grew in both territories, Jose said "*The Puerto Rican government's decision to proceed with the locally sponsored statehood "YES" or "NO" vote last November was consistent with this history.*"

What Jose leaves out was the fact that the Hawaiian native population had sharply decreased and that the Hawaiin native language was illegal to speak after 1898, until after Hawaii became a state. Alaska, as well had almost no indigenous population, and was nearly all white by the time they became a state. This is not the case in Puerto Rico. It would be the first and only state of which English is not the dominant language. This element of culture has been central to the United States.

separatistas, socialistas, pro-Cuba y otros mites y epítetos que evocan el macartismo norteamericano”<sup>5</sup>.

Entre el plebiscito de 2012 en que la Estadidad sacó 834,191 y en el de 2021 bajo a 623, 053, una reducción de casi 210,000 votos. Esa es la realidad estadística cuando se ofrecen alternativas de ELA con mayores poderes, libre asociación e independencia estas tres fórmulas tienen clara mayoría sobre la Estadidad. La mayoría Estadista se infla artificialmente cuando la consulta al pueblo es Estadidad sí o no.

Para lograr la culminación del ELA, en su reclamo de poderes autonómicos, tendría que estar fuera de la cláusula territorial. No por razones jurídicas, sino políticas. Siendo EE UU., un país soberano, tiene el poder para conceder poderes a sus territorios. No creo que lo haga porque se enfrentaría a peticiones similares de los demás Estados y se resquebrajaría la unidad por la cual se peleó una guerra civil y se consolidó un Estado federal fuerte en la asamblea constituyente. Señalamos al inicio de este escrito, como se peleó una guerra civil por la unión. Además, como se creó una federación que absorbió la mayor parte de los poderes soberanos de las trece colonias y la de los nuevos Estados dejando solamente los poderes residuales.<sup>6</sup>

Por otro lado, aunque EE UU no se caracteriza por respetar las Resoluciones de la ONU., ello no implica que moral y políticamente, estén exentos de observarlas. La Resolución 1514 XV, que se conoce como la carta magna de la descolonización, obliga a que se le devuelva la

---

5

Ver: El mito de una mayoría estadista: los datos no son los datos. [Emilio Pantojas García](#)  
PUBLICADO: 3 DE ABRIL DE 2021 EN OCHENTA GRADOS.

6 El bosquejo del gobierno de los [Estados Unidos](#) se presenta en la [Constitución](#). El gobierno se formó en 1789, cuando entró en vigor su Constitución remplazando a los [Artículos de la Confederación](#), convirtiendo a los [Estados Unidos](#) en la primera república constitucional del mundo.<sup>121</sup> El gobierno de los Estados Unidos se basa en los principios del federalismo y el republicano, en los cuales el poder se comparte entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. La interpretación y ejecución de estos principios, incluidos los poderes que debe tener el gobierno federal y cómo se pueden ejercer esos poderes, se han debatido desde la adopción de la Constitución. Algunos defienden los poderes federales expansivos, mientras que otros abogan por un papel más limitado para el gobierno central en relación con los individuos, los estados u otras entidades reconocidas”..



Maria Revelles  
51  
Kissimmee, Florida  
La Mesa Boricua de Florida

La Mesa Boricua of Florida is a grassroots movement that seeks to strengthen the power and well-being of Puerto Ricans everywhere – both in the states and the island. But as all Puerto Ricans know, our community cannot reach its true potential and well-being while Puerto Rico remains a colony of the United States.

The Puerto Rico Self-Determination Act of 2021 provides a vehicle for the decolonization of Puerto Rico and establishes a clear process on how that would be achieved. It has also gained the support of dozens of grassroot organizations in Puerto Rico and the states, as well as over 70 U.S. Representatives by providing an opportunity for all constitutional status options to appear on the ballot.

We want to thank Congresswoman Nydia Velazquez for always being a leader in our community and working to solve the colonial status that has been an obstacle for Puerto Rican's wellbeing since the invasion of Puerto Rico by U.S. forces in 1898. We also want to thank Congresswoman Ocasio-Cortez for co-authoring this bill and working with grassroot organizations to build support for a resolution of the island's status.

At La Mesa Boricua we are committed to informing the Puerto Rican community of all federal legislation that can have a real impact in our future and quality of life. We look forward to working with our partners, and with the leaders of our community to provide information about H.R. 2070 and how we can get involved in the process of decolonizing Puerto Rico.

soberanía plena a Puerto Rico para que pueda negociar con EE UU, de igual a igual, hasta llegar a un arreglo mutuamente satisfactorio que refleje la voluntad soberana de ambos pueblos. Cualquier legislación que deje en manos del Departamento de Justicia de EE UU., imponer, definir o reservarse la última palabra, que es lo que significa ser soberano; sobre las nuevas formulas de status político para Puerto Rico, sería una violación al derecho a la autodeterminación y a un verdadero proceso descolonizador. Ningunos de los países en negociación sobre futuras relaciones jurídico políticas, debe arrogarse para sí la facultad de decir o decretar la última palabra en dicha negociación.

La Asamblea constitucional de status, con Puerto Rico investido de soberanía y con ambos países obligándose a negociar formulas descolonizadoras, rompería el tranque más que centenario y abriría la puerta a relaciones entre ambos países que sean mutuamente beneficiosas y jurídicamente validas. El poder ejecutivo, dirigido por el Presidente J Biden, y el actual Congreso, dominado por los demócratas, tienen la obligación moral y política de ejercer su liderato para iniciar y culminar un verdadero proceso de descolonización. El gobierno de Estados Unidos, tiene el deber de honrar la obligación que le representó a la ONU, a través de su embajador, Henry Cabot Lodge, en 1953, cuando defendió la R. 748, que los relevó de rendir informes sobre Puerto Rico. Estados Unidos afirmó que respetaría cualquier reclamo de más poderes para Puerto Rico, incluyendo la independencia. La concesión de la independencia es un derecho inalienable de Puerto Rico y es mutuamente conveniente para ambos países. Según la Estadidad es la culminación del coloniaje, La independencia es la forma suprema de descolonización. Es la fórmula jurídica que permitiría relaciones futuras de plena cooperación entre países soberanos.

Muchas gracias.

En San Juan Puerto Rico, a 20 de Abril de 2021

Eduardo Villanueva Muñoz

Abogado y profesor de derecho

María J. Torres-López  
Palm Beach County, FL  
38 years old

Good morning to all present in Puerto Rico and those present via Zoom and social media. My name is María Josefina Torres-López and I'm the founder and President of Diáspora en Resistencia, an organization that uplifts and expands Puerto Rican voices and progressives groups in Puerto Rico. I'm a resident of the state of Florida as the over 1 million Puerto Rican compatriots who have had to leave our country and are now in this state and along with over 5 million who are all over the United States, Puerto Rico for one reason or another.

I'm here today to show my support for the recently reintroduced Puerto Rico self-determination Act of 2021 also known as HR 2070. This bill, while not perfect, it allows for an informed, democratic, inclusive and participatory process lead by the Puerto Rican people in Puerto Rico with the support of its Diaspora.

As many of the speakers have already said, Puerto Rico has been under US powers for over 123 years and in that timeframe, Puerto Rico has not been able to create a solid individual economy for its people. Instead, the US has systematically put in place economic policies that preclude us from doing exactly that. The Jones Act Maritime Law is one of the most important laws that control and impedes our economic growth.

I won't be mentioning all the other ways in which the US controls us and will instead say that they control everything.

The only way for the Puerto Rican PEOPLE TO grow out of this we must have the control and opportunity to bring to congress what we want and need.

That's where this bill comes in as it gives way to a process where Puerto Ricans will discuss and come to a consensus about what each option means to them and how they want it handled.

After that informed and process, we will be able to go to Congress and negotiate all of these things. It is only then when the Puerto Rican people will be able to vote, knowing exactly what the fine print is, making use of their democracy and their right to self-determination.

To Chairman Grijalva and all other Committee members and Congresspeople, your job is to listen to your constituents, and while people in Puerto Rico don't vote for you its diaspora does, and for us, you ignoring them is ignoring us, Listen now to what the country of Puerto Rico IS SAYING!

THA NKS

María J. Torres-López  
Palm Beach County, FL  
38 years old

Good morning to all present in Puerto Rico and those present via Zoom and social media. My name is María Josefina Torres-López and I'm the founder and President of Diáspora en Resistencia, an organization that uplifts and expands Puerto Rican voices and progressives groups in Puerto Rico. I'm a resident of the state of Florida as the over 1 million Puerto Rican compatriots who have had to leave our country and are now in this state and along with over 5 million who are all over the United States, Puerto Rico for one reason or another.

I'm here today to show my support for the recently reintroduced Puerto Rico self-determination Act of 2021 also known as HR 2070. This bill, while not perfect, it allows for an informed, democratic, inclusive and participatory process lead by the Puerto Rican people in Puerto Rico with the support of its Diaspora.

As many of the speakers have already said, Puerto Rico has been under US powers for over 123 years and in that timeframe, Puerto Rico has not been able to create a solid individual economy for its people. Instead, the US has systematically put in place economic policies that preclude us from doing exactly that. The Jones Act Maritime Law is one of the most important laws that control and impedes our economic growth.

I won't be mentioning all the other ways in which the US controls us and will instead say that they control everything.

The only way for the Puerto Rican PEOPLE TO grow out of this we must have the control and opportunity to bring to congress what we want and need.

That's where this bill comes in as it gives way to a process where Puerto Ricans will discuss and come to a consensus about what each option means to them and how they want it handled.

After that informed and process, we will be able to go to Congress and negotiate all of these things. It is only then when the Puerto Rican people will be able to vote, knowing exactly what the fine print is, making use of their democracy and their right to self-determination.

To Chairman Grijalva and all other Committee members and Congresspeople, your job is to listen to your constituents, and while people in Puerto Rico don't vote for you its diaspora does, and for us, you ignoring them is ignoring us, Listen now to what the country of Puerto Rico IS SAYING!

THA NKS



Maruxa Cardenas Surillo

Age 51

Miami, FL 33138

San Juan, PR 00911

Proud of my heritage and ancestors. Born and raised in Santurce, Puerto Rico. In representation of Our Revolution Puerto Rico.

Our Revolution is a progressive political action organization as a result of Senator Bernie Sanders's 2016 presidential campaign to continue his work. Our mission is to educate voters about issues, get people involved in the political process, and work to organize and elect progressive candidates.

The progressive issues Our Revolution promotes are almost identical to those of Sanders's 2016 presidential campaign: reducing income and wealth inequality, Fighting for \$15 minimum wage, Medicare for All, expanding Social Security, and making public colleges and state universities tuition-free. The organization supports minority rights, like African American, Native American rights, including Self Determination for Puerto Rico. Our Revolution Puerto Rico (ORPR) exists under these principles.

ORPR support's the Self Determination Act for Puerto Rico, H.R. 2070 introduced in the United States Congress by Congresswoman Nydia Velázquez and Alexandria Ocasio-Cortés that creates a process for Puerto Ricans to finally determine the relationship with the United States. Congress has control over Puerto Rico under the Territorial Clause of the US Constitution. We have been under this clause for the past 123 years. Congress in 2016 invoked this clause to impose an unelected Fiscal Control Board to rule a path of austerity to Puerto Rican's in order to pay

Wall Street at the expense of Puerto Ricans. The colonial relationship has caused, and causes, an unbearable harm to the island.

Since I could recollect, we Puerto Ricans have never had a chance to vote on a preferred political status with the defined implications of the options presented and what a transitional process would look like.

The Self-Determination Act would finally give the people of Puerto Rico a meaningful voice in their political future. The H.R. 2070 allows for a ranked-choice voting, meaning that residents can voice their voting preference without worrying that their vote won't count.

This Act is a path forward of an inclusive process that will allow **us** Puerto Ricans to decide in a fair balanced process. ORPR and Our Revolution National proudly support The "Self-Determination Act for Puerto Rico".



Good Morning. My name is Paul Figueroa. Ex-Candidate for San Juan City Council representing the Puerto Rican Independence Party (PIP) and Coordinator of the San Juan Committee of Vamos Puerto Rico.

To my compatriots, Chairman Grijalva, and the members of the House Natural Resources Committee, I would like to use the space granted to me in today's people's hearing to express my support of HR 2070 the "Puerto Rico Self-Determination Act of 2021" and my total rejection of HR 1522, known as the Puerto Rico Statehood Admission Act of 2021" with the expectation that my remarks will be submitted to the public record.

I support HR 2070 because it fulfills with the requirements set forth under international law and the United Nations Resolution 1514 which establishes the parameters of the procedural mechanism for self-determination and decolonization, under which more than eighty countries have successfully seen their right to decolonization fulfilled. In addition to the bill's adherence to international law, HR 2070 has several provisions which reinforce my support:

- The bill recognizes that Puerto Rico is an invaded nation with a distinct national, cultural, social, political, and linguistic identity from the United States. This recognition is critical to a meaningful decolonization process because in order for a people to self-determine one must first affirm and recognize the existence and character of that people.
- The bill creates a negotiation process wherein the parameters, conditions, and transition process for all decolonizing status options are pre-established.
- The bill creates an education process wherein the people can make an informed decision on their preferred status alternative before they make their decisive vote.
- This bill is the only bill that can build consensus around a status option. The PIP first proposed self-determination through a status assembly in the 1970s. However, in the last fifteen years more than ten bills for self-determination have been proposed in the Puerto Rican legislature. Currently, four out of Puerto Rico's five major political parties, or roughly seventy percent of the electorate, support a process of self-determination. Contrary to the argument of the supporters of HR 1522 this bill is widely supported, and is something the Puerto Rican people have been demanding for decades. Therefore, self-determination is the only decolonization mechanism which is democratic and can promise Puerto Rico's continued political and social stability by building a multi partisan consensus among broad sectors of the population.

It is for those reasons that I support this bill as a path in the right direction, and because it provides the seriousness and legality around a decolonization process that Puerto Ricans deserve, and aligns with principles of freedom which Americans value.

Contrary to HR 2070, HR 1522 does not establish a serious decolonization process nor does it fulfill the guidelines established by the United Nations for decolonization.

- The bill does not obligate congress to establish an immediate orderly transition process to statehood, meaning Puerto Rico could become an incorporated territory in perpetuity.
- Nor does the bill negotiate conditions of statehood admission such as defining our language, continuity of our pre-existing political and cultural institutions, tax plan to prevent capital flight under federal taxation, nor does it determine the continuity of PROMESA the Fiscal Control Board under statehood, nor does it address reparations for colonialism, or greater protections for native Puerto Ricans and our communities. I fail to understand how HR 1522 can even be considered a bill for decolonization when it hands deciding power over such fundamental factors to the will of the colonizing power without the input or consent of the colonized.
- The bill does not establish an education process for statehood, meaning the bill essentially asks Puerto Ricans to sign a perpetual agreement without knowing the contents or outcomes of that agreement.

The United Nations Resolution 1514 declares that “all people have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development” and for the above stated reasons HR 1522 does not fulfill that declaration.

The United Nations Resolution 1514 also declares “any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations”. HR 1522 does not fulfill those declarations because it looks to impose statehood when there exists an even division around the issue. To impose statehood in such an antidemocratic manner would only invite political turbulence in a moment when the political situations in the United States and Puerto Rico are especially fragile.

And with this I will close, support for independence obtained its best electoral outcome in more than seven decades, in alignment with international trends in other countries such as Scotland, Wales, Catalonia and Quebec, among others. This growing movement cannot be ignored especially when there is and will be international support for it, and when the very same foundational documents of the United States reaffirm the inalienable right to independence. If the United States were to impose statehood now, Congress would have to confront the possibility that Puerto Rico could elect a pro-independence Latin American and Caribbean representative or senator to serve in Washington, while the United States denies us our right to political freedom.

## **PAUL FIGUEROA 2020**



Given this complex panorama, I endorse HR 2070 as the beginning of a democratic, unifying, serious and legitimate process to finally put an end to the sad history of the colonial regime in Puerto Rico.

Thank you for your time and for the commitment of those who wish to seek a resolution to our status. This is my statement, thank you.

Al Comité de Recursos Naturales, al Pueblo de Puerto Rico y a las organizaciones que convocaron esta vista virtual del pueblo:

Soy Javier Smith Torres artesano y activista por la descolonización desde una perspectiva transversal y comunitaria.

En esta ponencia haré planteamientos sobre **(1) La negociación entre iguales** **(2) El llamado verdadero de la democracia** y **(3) El discurso de que “ya todo se ha debatido”**. Además, en esta versión escrita incluyo un planteamiento sobre **(4) La constitucionalidad y la necesidad de considerar variaciones de las alternativas** que se omitió de la versión leída para mejor cumplir con los límites de tiempo.

## I. Sobre la igualdad en el proceso de negociación

En su ponencia del 14 de abril, el licenciado Pedro Pierluisi intentaba enmarcar el debate repitiendo el concepto de que somos “estadounidenses viviendo en Puerto Rico” al menos 9 veces en 6 minutos. Pero Puerto Rico es su propia nación. Somos un pueblo ocupado por otro pueblo. Nuestra ciudadanía es, objetivamente, un hecho de casualidad histórica.

Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, redactada y firmada por EE.UU., establece que (1) toda persona tiene derecho a una nacionalidad y (2) a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Enmarcar la discusión como una entre estadounidenses, es privar arbitrariamente al pueblo puertorriqueño de su nacionalidad. El reconocimiento de que somos dos naciones diferentes que deben entrar en un proceso de negociación con respeto como iguales tiene que ser un punto de partida.

## II. El llamado de la democracia

En la pasada vista vimos reducidas las grandes aspiraciones democráticas de las sociedades al equivalente de carreras de caballos. Incluso la licenciada Jenniffer González repitió una frase autoritaria digna del monarca Luis XIV: "La elegida soy yo." Democracia significa participación, diálogo y la búsqueda de acuerdos. Ni la consulta partidista del 3 de noviembre cumplía con esos requisitos democráticos, ni los resultados muestran el logro de un acuerdo social.

Con una campaña de miedo y en el contexto de 123 años de coerción económica, política y social, incluso de violencia y represión, los proponentes de la consulta obtuvieron una estrecha mayoría. Pero podemos señalar que desde las últimas consultas, su apoyo bajó; bajó numéricamente —la cantidad más baja desde el 1968—, bajó en % sobre votos válidos emitidos y bajó en % sobre el padrón electoral. Sólo el 28% del universo electoral consintió a la estadidad, mientras que el resto del país se negó a expresar ese consentimiento, como pasaría nuevamente si impulsan otra consulta unilateral con el Proyecto 1522.

Esa falta de consentimiento es importante. Recordemos que esto no es sobre quiénes ocuparán puestos por un período limitado. No es sobre dónde ir a almorzar hoy.... ¿Qué se hace con quienes no consienten a que se les prive de su nacionalidad para formar parte de otra "nación, única e indivisible"? ¿Qué hacemos con quienes se niegan, como expresión política, a votar en elecciones coloniales? Es un tema existencial, de importancia universal, de derechos humanos y de ley internacional que tiene parámetros más estrictos.

El tema de la descolonización es, además, parte de la "sagrada misión de civilización" que llevó a EE.UU. a impulsar la Sociedad de las Naciones y luego las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia expresó el 21 de junio de 1971: «El sistema de Mandatos establecido en [el pacto] se basaba en dos principios de la máxima importancia: el principio de no anexión y el principio de que el bienestar y el desarrollo de los pueblos interesados constituía una misión sagrada de civilización. [...] el objetivo final de esa misión sagrada era la libre determinación y la independencia. El mandatario tenía que cumplir varias obligaciones y el Consejo [...] tenía que procurar que se cumplieran.»

Frente a esta misión sagrada, ¿Qué mandato existe para el Proyecto 1522 sin contar con el resto del país? El mandato —la obligación— que existe es la que tiene EE.UU. en apoyar la eliminación de las presiones económicas, políticas y sociales que limitan la libre determinación. Esa es la "misión sagrada" y democrática.

### **III. “Ya todo se ha debatido”**

La discusión sobre el estatus ha sido destructiva. Va como sigue: «Tienes las siguientes opciones. Toma un bando. Sólo falta escoger una opción por el método que sea; las opciones son idénticas en su valor descolonizador.» Esa competencia, sin contenido y sin diálogo constructivo, donde el resultado da lo mismo, obvió los adelantos sobre el tema de la descolonización que se dieron en el mundo a lo largo del Siglo XX, y vacía el concepto de su "misión sagrada".

Si creemos en procesos que incluyan a personas con diferentes preferencias —preocupación que compartimos con el Sr. Bruce Westerman— las premisas tienen que ser diferentes. No todo está hablado.

¿Por qué no permitir que los sectores pongan sobre la mesa sus requisitos mínimos? ¿Por qué no abrir el diálogo para acordar las condiciones descolonizadoras que debe cumplir cualquier fórmula? ¿Qué necesidades o deseos hay detrás de nuestras preferencias de estatus? ¿En qué reclamos podemos estar de acuerdo?

Traeré el ejemplo de la estadidad, que está en discusión con el Proyecto 1522. Hay quienes plantean que sólo hay una estadidad. Pero en diferentes espacios se habla de diferentes tipos.

Se nos vende una estadidad accesible, con garantías del uso del español en lo legislativo, jurídico y administrativo, pero la vista del 14 se llevó a cabo en inglés, sin traducción al vernáculo y con deficiencias en la traducción de la compañera María de Lourdes Santiago, quien depuso en español.

Se nos vende una estadidad sin el Acta Jones de Cabotaje, con acuerdos de exención de visado y con soberanía, pero no nos hablan de las cláusulas de supremacía federal o comercio interestatal.

Un proceso asambleario, que active el diálogo social, nos permitiría identificar los asuntos con claridad.

#### **IV. Sobre la constitucionalidad y la necesidad de considerar variaciones de las alternativas**

La Sra. Johanne Vélez García expresó preocupación de que el Proyecto 2070 «obligaría al congreso en pleno a votar sobre cambios en una gran cantidad de leyes federales [...] sin enviar a los respectivos comités, sin enmiendas constitucionales, y con un debate mínimo». La felicito por reconocer la importancia del debate profundo, incluso más allá de lo que establece el Proyecto 2070. Reconocer que EE.UU. tiene que plantear sus propios cambios es un paso fundamental.

El “alma” de Estados Unidos también se ha afectado por su expansión de costa a costa y por su conquista de territorios en ultramar. EE.UU. también tiene que superar los efectos del colonialismo. Integrar a Puerto Rico a través de un proceso divisivo, sin primero negociar los contenidos de la relación, sin considerar algunos cambios a su propias formas, leyes o estructuras, o a su misma constitución como señala la Sra. Vélez, condenaría al país a un incremento en tensiones y dejaría a Puerto Rico insatisfecho y con un movimiento secesionista activo y militante. Si queremos hacer justicia y estar “del lado correcto de la historia”, y si la idea es que Puerto Rico y Estados Unidos estén en pie de igualdad, EE.UU. debe abrirse a escuchar nuestras propuestas, no sólo sobre PR, sino sobre lo que sería ese EE.UU. plurinacional, democrático e inclusivo que tendría que comenzar a ser.

En ese sentido, la conclusión del Sr. Raúl Grijalva en la vista del 14 es importante cuando plantea que los retos constitucionales se pueden superar en la medida que “la ley” puede cambiar. Así es que no hay solo una forma de estadidad, una sola forma de independencia o un solo posible acuerdo de asociación.

#### **V. Conclusión**

Recomiendo que retiren todo su apoyo al proyecto 1522 sobre la estadidad y que inmediatamente abran la conversación con el Pueblo de Puerto Rico.

Denle la seriedad que este tema amerita, no desvirtúen la descolonización o la democracia. No nos acorralen hacia otro voto divisivo y limitante en este contexto de tribalismo partidista y presión colonial. El lado correcto de la historia —del que tanto se habló en la vista— la “misión sagrada de la civilización” es el de la libre determinación, con toda su profundidad...

## Self-Determination for Puerto Rico NOW: a moral imperative, an inalienable right

(In support of the “Puerto Rico Self-Determination Act” presented by Nydia Velazquez and Alexandria Osorio-Cortez to the US Congress.)

Written by: Raquel M. Gonzalez-Sparks

I begin by stating that Puerto Rico is a NATION. Defined and sustained quintessentially by its CULTURE, it has a PEOPLE, a LANGUAGE, a common HISTORY, a TERRITORY, and a particular ETHNIC profile that define its specificity within the community of Nations. The People of Puerto Rico share a connection to their culture and to their homeland that transcends time and circumstances, to the point where many of those who have had to migrate hold a deep desire to return. The Puerto Rican diaspora can hold faith to this.

When the United States invaded the Island, they did not find it empty. There was a Nation here; an organized and clearly defined national identity with levels of political autonomy, well in the process of acquiring full sovereignty. The arrival of the American military forces thwarted this process and was met with strong and armed resistance, a historical element that has been withheld from the sanitized historical books used to teach in our schools. American forces were met with strong local resistance that was overrun by sheer force but has never disappeared.

Since then, first with a military dictatorship, then a civil one, moving on to different varieties of government of occupation, the “colony” was brought under control. Let us be clear, Colonialism is a practice of domination, which involves the subjugation of one people to another in favor of the interests of the colonialist presence. Colonialism as it is experienced in Puerto Rico robs the Puerto Rican people of the arena within which they can exercise self-rule and self-governance, in this way placing them in a denigrating position of subjugation which has been exacerbated through a long standing deliberate campaign designed to crush the sense of identity from which our people draw their strength and force of will, persecuting those with the capacity to inspire us into believing we can aspire to a future of dignity and freedom, keeping us in a state of constant crisis, and using social assistance as a means of dealing with the levels of poverty that have been growing over the years as a result of the colonial policies implemented.

In a traditional understanding of colonialism, a transfer of population to a new territory, where the people arriving lived as permanent settlers while maintaining political allegiance to their country of origin was the model. In other words, though they may live in the territory of the colony, their interests, understandings, aspirations and needs align with the country of origin, NOT with the country of residence. In fact, in this concept, the presence of any other community is of no consideration whatsoever. Should they exist, they are either invisible or made invisible. In our case, we have been “invisiblized” as a people. As long as we remained in our territory, we were totally invisible; non-existent as far as the common American was concerned. When in “the mainland”, our only possibility of being seen was as a minority (never a national), be it black, Hispanic, or Latino.

The case of Puerto Rico is in many ways unique, as it suffers not only under Colonialism but also under Imperialism, both of them forms of subjugation as a needed requisite in the process of imposing the interests of the Colonialist and Imperialist power above those of the People that inhabit the now occupied territory. Imperialism centers on the way that one country exercises power over another, whether through settlement, sovereignty, or indirect mechanisms of control. In Puerto Rico they have all been tried with different levels of success. At present there is a new and robust initiative geared towards the dismantling of the Puerto Rican identity and the Puerto Rican Nation that the move to statehood considers their biggest obstacle because it points to our differences; and there are many, and they are profound. They are in fact deal-breakers.

Much has been done in the attempts of erasing the national identity of the People of Puerto Rico to no avail. It is once again under siege through a multiplicity of fronts as people in Puerto Rico that are aligned with colonialist interests continue in their attempt to disappear the Nation of Puerto Rico. They will not succeed.

Within the political arena, the first move has been to substitute the concept “The People of Puerto Rico”, which as we know carries the weight of the technical definition of a People as recognized by the community of nations, with “American citizens residents of Puerto Rico”, which identifies the people of Puerto Rico as citizens of the United States who HAPPEN to reside in Puerto Rico, lumping them together with any American citizen who happens to reside in Puerto Rico. Nothing could be further from the truth.

Following this train of thought, the electoral code was substituted by a new one designed to put the electoral process in the hands of the political party that was in control at the time, the PNP, which happens to be the only one with statehood for Puerto Rico in its agenda and now counting with a dwindling thirty some percent of support within the voters in the last elections. In this manner they guaranteed control over the outcome of the electoral process, as we have all seen to our chagrin in recent events. But this was not enough. They included the Presidential vote in the code, something we have no participation in nor control whatsoever in our being allowed to participate in, as if we already were a member state of the United States. All this, of course, using public funds to push party agendas. A stunt to try and convince the People of Puerto Rico that we are, in fact, a part of the American Nation with the right to said vote in the hopes of creating some kind of event that serves their agenda. This of course was done without the support of any other political force.

Their strategy is, on the one hand, to eliminate anything that they perceive as promoting the wellbeing of Puerto Rico outside their path to statehood in order to sustain the narrative that ONLY statehood can help Puerto Rico move forward and thrive, that only the US can bring prosperity, and on the other hand consistently attempt to create a reality in which the People of Puerto Rico are in such dire straits and need, that they will accept their narrative that the only way out of the crisis is through becoming a state. Both cruel, manipulative, and dishonest. They do not care whether the people of Puerto Rico actually WANT to become a State; that is secondary to them. As long as they can get them to

vote or accept the result, they will consider it a victory. People in these circumstances vote, not because they agree; not because they want to; not because they feel as part of the American Nation. They do so because they actually believe it is the only way out of the crisis that has been created for them. This is a crime against humanity. I ask you to put a stop to it. Do not continue to enable it.

The second move is to convince the people of Puerto Rico as well as the Congress of the United States and the world at large, that the People of Puerto Rico WANT to become a State. To this end, they set forth to create a “paper trail” that would support this narrative, combined with a media campaign. Their first attempt was by means of a plebiscite where people voted on two main questions: Do you want to continue being a colony? And the second, if your answer was no to the colony, then is it YES to statehood or YES to one of three different alternatives that are NOT statehood? In this manner, they designed a ballot where the main opposition party (which is has always been the majority in serious plebiscites) would be split into two or three different alternatives, and the vote for independence would also remain an alternative, knowing that at that time it was not a serious threat. In that plebiscite the answer was clear, although not what Jennifer Gonzalez and Mr. Pierluissi would like you to believe. The People of Puerto Rico overwhelmingly showed they are against the colonial status, but also against statehood. There was also the plebiscite where they say that 97% of Puerto Ricans voted for statehood. What they do not tell you is that the opposition campaigned for the blank vote and abstention from that specific vote. And the great winner was the abstention. There, once again, statehood was rejected by a solid majority. No matter how they attempt to spin it.

Then we come to the recent referendum. Statehood YES or NO. Here I must point out various things. First: Jennifer Gonzalez, in her capacity as Resident Commissioner went on TV as part of her to get people to vote yes, to instill fear in the minds of an already hard-hit community. In a country still reeling from Irma and Maria, earthquakes, the imposition of austerity measures in an ongoing economic recession, the presence of the Oversight Board that is acting as a dictatorial Junta, massive lay-offs, waves of migration of our younger generation in search of work, and an aging population of grandparents many of whom are now helping their sons and daughters support their children with their social security checks and their hard earned pensions, she tells them that if they vote NO so statehood, the American government (and that includes YOU members of congress), will interpret that they don't like the Americans and take away their social security. The only way that they can guarantee receiving the social security check they have paid for through 30 plus years of work, said she, was by voting “YES”. Well, guess what. Many people who DO NOT want Puerto Rico to be a state, knowing that the Justice Department had already said that the referendum was not recognized by them because it did not comply with the educational campaign requisite (among others), voted YES out of fear of losing their Social Security checks. The same narrative was used for food stamps, wick, pell-grants, and Medicaid to push the lower economic classes to vote out of fear. You take impoverished, strangled people, in a flailing economy and threaten them with loosing what little they have in the middle of a pandemic where people are getting evicted and many are still under blue tarps, and you will have people willing to do whatever you say,

just to avoid such a worse calamity and save their children and grandchildren. That is the definition of coercion. It is cruel and, in my opinion, a crime against the people to whom she has the responsibility of protecting, not using. For shame!

And it does not end there. Knowing that after the debacle of the summer of 2019 the New Progressive Party (PNP) was in real danger of losing the elections by a landslide, the new code was passed and implemented while people were in lockdown, enabling said party to control the elections. Much has come to light on the issue of electoral irregularities that could well be redefined as fraud. The proof is there. As it is relevant in relation to what happened with the referendum vote, let me put you in context.

The main irregularity is the presence of more votes than people allowed to vote. By the thousands. To begin with, the number of voters authorized to vote in many electoral points and the number of ballots that ended up being counted did not match, a problem that was consistently denounced by many within the mail-in absentee ballots and the early vote. Add to this the fact that in many cases the custody chain of the ballots before and after the election event was lost, and the lists of authorized voters and voting acts were lost or withheld. A serious problem that also affected the plebiscite ballot.

In contrast with the false claims of extensive fraud that plagued the US Presidential elections, these irregularities are well documented. As two cases in point, many of them are part of litigation process challenging the adjudication of the Mayorship of San Juan and the Representative for Precinct 3 of San Juan to the House of Representatives seat. The proof is THERE. It is unquestionable. So much so that the “Mayor” of San Juan hid so as not to receive the summons, and then used that to have the case dismissed on a technicality. Such was the fear of everyone finding out the level of irregularities and the fact that his election could not be validated. The supreme court reversed his pathetic win, and the case was then seen on its merits.

In a terrible miscarriage of justice, the main part of the evidence was not accepted for having been “announced but no presented with the suit”, even though the instructions form the judge had been to present a list of the evidence to be presented at trial. Again, on a technicality, the case was finally dismissed although the evidence that WAS presented was enough to show that a new election was necessary (I refer you to the case of Manuel Natal vs Miguel Romero, and the results of the investigation OIG). The number of possible voters and actual votes does not match. Thousands of extra votes, that curiously give the win to the PNP candidate.

I bring this to the fore because all the irregularities referenced above and in the legal cases apply to the referendum vote. All those “extra” absentee and advance voting ballots contained referendum ballots. What does that mean? What is the impact on the “results”? What does the numbers tell us? I would like you to take a quick look. For a deeper look, we must go into the results of the election in depth, which is not the point of his paper.

In an election where only 55% of the voting population voted (in a country where voter participation is quite high traditionally), the first red flag is that 45% of the VOTING

population did not express themselves. Why? With all the possibilities for early voting, absentee and mail in ballots, can we really say that COVID19 was the responsible factor? Do those who did not vote want to be a state or not? These questions do not have simple answers.

We must consider a number of realities that exist, in many cases, beyond the spectrum of what you see as you look at Puerto Rico. There is a militant Nationalist Party and a sector of the population that believes in independence that refuse to vote in what they describe as "colonial elections" that perpetuate the colonial status. How big is that percentage? We can't tell. But they are there. The rest? We do not know. So, we have an initial margin of error of 45%.

Then we look at all the "extra" ballots that were counted in. Ballots corresponding to Unit 70 (early voting and mail-in absentee ballots) that exceeded the number of people that requested said voting and received ballots, which are in the thousands. Just in precinct 3 of San Juan, we know there were 700-plus extra plebiscite ballots in this unit in excess of the number of people that were authorized to vote and received the voting materials and were counted anyway. The point here is that as the evidence was collected and presented in court and the legislature in the cases challenging the results described above, in both cases the 'extra' ballots tipped the election in favor of the candidate of the PNP, the party pushing for statehood in the plebiscite. Add to that the following "results" of the voting:

VOTED YES – 655,505 50.8%

VOTED NO – 592,671 46%

VOTED BLANK - 39,546 3.07%

NULLIFIED - 464 .036%

VOTED WRONG 1,027 .079%

and the only thing we CAN say if that there is NO mandate from the people of Puerto Rico for statehood. The claims and misrepresentations being made by both Jennifer Gonzalez and Pedro Pierluissi must not be considered as the voice of the People of Puerto Rico. It is NOT.

This means that the People of Puerto Rico have not yet spoken. Not in the language of a referendum. There has been a manipulation of the people through misrepresentation and a form of coercion to try to produce a vote that does not correspond to their real will, but rather to fear and misinformation, and there has been gross misrepresentation to you, the people in Congress, of the realities of Puerto Rico.

I go back to the fact the Puerto Rico is a Nation. A person who is a member of a nation feels him/her self as part of a collective of people with whom he/she shares historical and cultural definitions, a cultural identity, traditional and linguistic identities that are all reflected in the way they live, the way they understand and connect with the world and each other. These elements are alive in their way of being present in the world with those who are part of the person's Nation holding a substratum of content; a Deep immediate and almost visceral understanding of the

interaction between the people and with the land that gives the individuals in this collective a profound sense of belonging that awakens in

the individuals the sense of family and feelings of loyalty and of duty to the collective. In the case of the Puerto Rican People, our sense of family extends to all members of our Nation. Those feelings, that deeply emotional and visceral reality that allows a person to identify him/her self as part of a nation is responsible for the individual to feel a sense of duty towards this “extended family” that comes from understanding oneself as part of that history, that cultural and traditional heritage that is a definition of family and family roots. They awaken feelings of loyalty and of consideration for others, both necessary elements for a society to function in a healthy, cohesive way where all the members feel comfortable reflected, protected and recognized in equal manner because they share a common definition. A common identity.

Among all the individual particularities that exist between human beings in all nations and societies, there is that common definition within which we can connect with each other in the public and social realms that is born from the way in which we relate to each other. The result of this ever-evolving common understanding born from a shared historical background, context and culture defines the ways in which we understand that the society, OUR society, needs to structure itself. It is from here that valid, appropriate and adequate institutions are then created, and the governance and government bodies are structured that reflect the People’s understanding of reality and society, and their path forward. This is a process that Puerto Rico has been trying to accomplish for a very long time. It is time for the imperialist and colonialist realities to withdraw from this arena that they have occupied by force, not by right.

For the will of the people to be evidenced and acted upon, there needs to be an arena, free of coercion and colonialist/imperialist control, where the people of Puerto Rico can come together peacefully, in representation of all walks of life and all political tendencies, to sit down and have an open discussion. This is the first step in a process of REAL self-determination. A place where all those who did NOT participate in the referendum come to the table and express their point of view and participate in a real, deep, and inclusive binding process of political dialogue that leads to a real process of decolonization through the path of self-determination. Anything else is an attempt on the fundamental rights of the People of Puerto Rico, as individuals and as a Nation.

To this day, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, or so the United Nations states.

Colonialism, as a manifestation of the disregard and contempt for human rights has resulted in barbarous acts which should and have outraged the conscience of the people of Puerto Rico and all others who have had the opportunity of learning about them. Such acts have included the assassination of nationalist leaders, deliberate and targeted persecution of individuals, groups and organizations that have promoted the ideals of sovereignty, political independence, and other forms of economic, political and social organization, the open racial and ethnic discrimination against the people of Puerto Rico, and the imposition as of late of the Oversight Board with devastating results for the people of Puerto Rico, among others.

Such practices have promoted the restriction on freedom of speech and belief by creating an environment where beliefs in political independence, free from the colonial blanket that smothers it, is not only frowned upon by those in power, but actively attacked by blackballing and persecuting those who openly express these ideas.

As these practices cracked down on the people of Puerto Rico, many soon learned that going against the colonialist establishment would condemn them and their families, to lives of need and suffering. Jobs were consistently denied, children in school were singled out, access to loans blocked, reputations assassinated, leaders were incarcerated under excessive sentences, and assassinations perpetrated as means to obliterate a voice or to instill fear in those who might dare speak against them. As a result, today there is no freedom of speech (unless it is within circles of like-minded individuals) and belief (unless it is kept private), nor is there freedom from fear and want, proclaimed as the highest aspiration of the common people. In Puerto Rico, the practice of colonialism by the United States Congress has robbed us of our fundamental freedoms and our inalienable right to self-determination in clear violation of the Universal Declaration of human Rights.

The time is NOW. The last four (4) years has made is painfully clear. The current political status has become clear for all to see: Puerto Rico is a colony under imperialist domination. In the most real and technical sense of the words. It is a Nation whose territory has been occupied by force, where the wellbeing of the Puerto Rican People is not the priority of the occupying force as its priority is the well-being of its people. To say that the people of Puerto Rico are a part of said people, is not only a false but an insult to our intelligence and our dignity. We may be American citizens, as a result of an act of congress, but we are citizens of Puerto Rico. Our interests are different. We are not here to enable the interests of the American occupying power. We are here to defend our own. And at this juncture they have reached the point of being in direct opposition.

No more sanitizing of our history to obliterate all those who have fought for our freedom and the crimes that have been committed against our People. No more hiding the realities of discrimination and disregard for their wellbeing. No more fear tactics to manipulate results and perpetuate power in the hands of those who serve the outside interests at the expense of our people. No more squeezing out people dry to serve American economic interests. No more displacement of our people. No more. We are not a "Hispanic minority", a "Latino minority" or any other type of minority so defined by the people of the United States of America. We are not invisible. We are the People of Puerto Rico. No amount of semantics will ever change that.

For this reason, it is imperative that the United States Congress understands that Puerto Rico is a Nation that is fundamentally DIFFERENT from the United States; that it HAS NOT asked to become a State of the union as the Resident commissioner and the current governor would like to make you believe; that is necessary for YOU, as the occupying power in your colonialist/imperialist presence, to withdraw from the political space of political determination, and cease to interfere with the political dialogue within the Puerto

Rican society so that, free from coercion, fear and manipulation, we can come together in a Status Assembly. To this effect, as an act of good faith, the United States Congress must pass the “Puerto Rico Self-Determination Act”, sending a clear signal of its resolution to cease its colonial aggression over the Puerto Rican Nation, provide the financial means for putting into effect as part of its restitution for the damaged that its presence as a colonial/imperialist presence has had over our People, and step back as we begin our process to self-determination. It is a moral imperative. I